

PERIODO 125°



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

8ª REUNION – 7ª SESION ORDINARIA
6 DE JUNIO DE 2007

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don DANIEL O. SCIOLI y del señor vicepresidente del Senado, doctor MARCELO EDUARDO LOPEZ ARIAS

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor NESTOR H. RIGHETTI y señor ROBERTO V. MAIQUES

PRIMERA PARTE



PRESENTES:

BAR, Graciela Y.
 BASUALDO, Ricardo G.
 BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
 BUSSI, Ricardo A.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CAPOS, Liliana
 CASTILLO, Oscar A.
 CASTRO, María E.
 CLOSS, Marice F.
 COLOMBO, María T.
 CURRELLI, Miriam B.
 DANIELE, Mario D.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FELLNER, Liliana B.
 FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina F.
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 GALLEGU, Silvia E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIRI, Haide Delia
 GIUSTI, Silvia Ester
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda
 IBARRA, Vilma L.
 JAQUE, Celso A.
 JENEFES, Guillermo R.
 LEGUIZAMÓN, María L.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 MARINO, Juan C.
 MASTANDREA, Alicia E.
 MAYANS, Miguel A.
 MENEM, Carlos S.
 MERA, Mario R.
 MIRANDA, Julio A.
 MORALES, Gerardo R.
 NAIDENOFF, Luis P.
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
 PERCEVAL, María C.

PERSICO, Daniel Raúl
 PICCHETTO, Miguel A.
 PINCHETTI DE SIERRA MORALES, Delia N.
 QUINTELA, Teresita N.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RIOFRIO, Marina R.
 RÍOS, Roberto F.
 RODRÍGUEZ SAA, Adolfo
 ROSSI, Carlos A.
 SAADI, Ramón E.
 SALVATORI, Pedro
 SANZ, Ernesto R.
 SAPAG, Luz M.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo
 URQUÍA, Roberto D.
 VIANA, Luis A.
 VIGO, Elida M.
 VIUDES, Isabel J.
 ZAVALÍA, José L.

AUSENTES CON AVISO:

CAPARRÓS, Mabel L.
 GIOJA, César A.
 GUINLE, Marcelo A. H.
 ISIDORI, Amanda M.
 LATORRE, Roxana I.
 MARÍN, Rubén H.
 MARTÍNEZ, Alfredo A.
 MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
 MASSONI, Norberto
 MAZA, Ada M.
 PAMPURO, José J. B.
 SÁNCHEZ, María D.

LICENCIA:

FALCÓ, Luis
 KIRCHNER, Alicia M. A.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 6.)
2. Homenaje a la memoria del senador (m.c.)
 Florencio Elías. (Pág. 6.)
3. Plan de labor parlamentaria. (Pág. 7.)
4. Asuntos entrados. (Pág. 8.)
5. Moción de preferencia - Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales. (Pág. 8.)
6. Moción de preferencia - Presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques nativos. (Pág. 8.)
7. Moción de preferencia - Programa de saneamiento de la deuda pública provincial. Régimen

de propiedad urbana especial. Fondo especial para el desarrollo sustentable de zonas mineras. Designación por concurso de autoridades del Enargas. Reglamentación de puertos privados. (Pág. 12.)

8. Moción de preferencia - Código de ética mundial para el turismo. (Pág. 12.)
9. Rechazo de moción de preferencia. (Pág. 13.)
10. Incorporación de comisión en el giro de un proyecto. (Pág. 14.)
11. Moción de preferencia - Cuna del cooperativismo agropecuario argentino. (Pág. 14.)
12. Consideración conjunta de órdenes del día. (Pág. 15.)

O.D.- 242: Declaración de interés del Honorable Senado de las VI Jornadas

13. **Ampliación de licencia por enfermedad de un señor senador.** (Pág. 17.)

14. **Penalización de asociaciones ilícitas terroristas y su financiamiento.** (Pág. 17.)

15. **Declaración de utilidad pública y expropiación de diversos inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.** (Pág. 34.)

16. **OD.-304: Reconocimiento de la ciudadanía británica a habitantes de Malvinas.** (Pág. 41.)

17. **Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.** (Pág. 43.)

S.-1.492/07 y S.-1.500/07: Día de la Bandera Nacional.

S.-536/07, S.-1.248/07, S.-1.368/07, S.-1.372/07, S.-1.416/07, S.-1.430/07, S.-1.475/07, S.-1.620/07 y S.-1.704/07: Reconocimiento a los trabajadores de prensa del país.

S.-1.641/07 y S.-1.472/07: Aniversario del fallecimiento de Dolores Lola Mora.

S.-1.016/07, S.-1.466/07 y S.-1.512/07: Día Mundial de Lucha contra la Desertización y la Sequía.

S.-1.170/07, S.-1.267/07, S.-1.477/07 y S.-1.513/07: Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas.

S.-364/07, S.-1.026/07, S.-1.198/07, S.-1.237/07, S.-1.301/07, S.-1.374/07, S.-1.511/07, S.-1.644/07, S.-1.680/07 y S.-1.719/07: Día del Medio Ambiente.

S.-1.069/07: Avance en las investigaciones de la causa "Carrillo", en Formosa.

S.-1.225/07 y S.-1.315/07: Amenazas recibidas por el juez Rozanski.

S.-1.268/07, S.-1.300/07 y S.-1.600/07: Día de la Cruz Roja Argentina.

S.-1.636/07: Día del Libro.

S.-1.119/07, S.-1.363/07 y S.-1.664/07: Solicitud de medidas para evitar el cobro del servicio de playa.

S.-1.616/07: II Seminario Internacional Prevención de Accidentes de Tránsito, a realizarse en Santa Fe.

S.-923/07: 100º aniversario de la fundación de una escuela en Santa Fe.

S.-1.646/07: Reconocimiento hacia la artesana Selva Olinda Díaz de Helguero, pre-

miada en Córdoba.

S.-1.490/07: 1º vuelo de un avión de la Fuerza Aérea, propulsado por biocombustible desarrollado en nuestro país.

S.-736/07: III Congreso Internacional "La Cultura del Trabajo y sus Valores".

S.-4.160/07, S.-4.413/07 y S.-4.482/06: 50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

S.-1.243/07: Beneplácito por la trayectoria del profesor Sanabria.

S.-1.385/07: Aniversario del Día del Gendarme Infantil Argentino y la creación de la Agrupación Ayuí de Gendarmería Infantil, de Concordia, Entre Ríos.

S.-1.493/07: Día de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera.

S.-962/07: II Foro Latinoamericano de Montaña, a realizarse en Jujuy.

S.-1.412/07: Fiesta Inti Raymi o Fiesta del Sol, a celebrarse en Jujuy.

S.-1.413/07: 100º aniversario de una escuela en Jujuy.

S.-1.570/07: Saludo a todos los pueblos y comunidades indígenas asentados en el país al celebrarse un nuevo año.

S.-1.355/07: Primera Edición del Premio Nacional Güemes, Héroe Nacional, a realizarse en Salta.

S.-1.266/07: Conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil y Día Nacional Contra el Trabajo Infantil.

S.-363/07: VII Congreso Provincial Vecinalista.

S.-1.269/07: Día Nacional de la Seguridad Vial.

S.-1.649/07: Concurso de integración de Pesca del Surubí 2007.

S.-1.682/07: Aniversario del día que conmemora la afirmación de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.

S.-1.683/07: Nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Bella Vista, Corrientes.

S.-1.622/07: Participación del alumno Matías Saucedo en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas.

S.-1.623/07: Homenaje a D. José Hernández.

S.-1.710/07: Actividades educativas organizadas por la Asociación Civil de Diabetes Argentina.

S.-1.709/07: I Congreso Internacional Sobre Víctimas de Delitos Contra la Integridad Sexual y IV Curso de Actualización, a realizarse en Córdoba.

18. Consideración de proyectos reservados en mesa. (Pág. 46.)

S.-1.764/07: Congreso de provincias y destinos turísticos.

S.-1.723/07: Homenaje a Martín Miguel de Güemes.

S.-1.021/07: Homenaje a la provincia de San Juan por aniversario de su fundación.

S.-1.630/07: Convocatoria en Entre Ríos de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria.

S.-867/07: Centenario de la Fundación del Instituto Superior de Bellas Artes e Idiomas "Josefina Contte" de la ciudad de Corrientes y la entrega de una placa de bronce.

S.-853/07: Centenario del Palacio Legislativo de la ciudad de Corrientes y el compromiso de colocar una placa recordatoria

S.-1.379/07: Declaración de interés legislativo de la resolución adoptada por el Consejo Federal de Educación al imponer el nombre de "Mag Rosa Afiasco" a la Escuela N° 975 y la entrega de una placa de bronce alusiva a la disposición adoptada.

19. Apéndice

I. Asuntos Entrados. (Pág. 48.)

II. Proyectos y órdenes del día con las respectivas sanciones del Honorable Senado. (Pág. 497.)

III. Actas de votaciones electrónicas. (Pág. 709.)

IV. Inserciones. (Pág. 713.)

Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 26 del miércoles 6 de junio de 2007:

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia de Jujuy, Guillermo Jenefes, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Jenefes procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SENADOR (M.C.) FLORENCIO ELIAS

Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje al senador (m.c.) ingeniero Florencio Elías.

Obra sobre el particular un proyecto presentado, del que se dará lectura por Secretaría.

Sr. Secretario (Estrada).— (*Lee*) "El Honorable Senado de la Nación resuelve rendir homenaje y manifestar su más profundo pesar por el fallecimiento del ingeniero Florencio Elías, quien fuera miembro de este cuerpo, como senador nacional de la provincia de Salta, desde 1973 hasta 1976, acontecido el día 4 de junio de 2007 en la ciudad de Salta, provincia del mismo nombre.

Sr. Presidente. — En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.

En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.¹

¹ Ver el Apéndice.

3

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.

–El texto es el siguiente:

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA
LA SESION DEL DÍA 06/06/07

–Consideración en conjunto de los órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración.

–Consideración de los órdenes del día con proyecto de ley: 306 y 305.

–Consideración de la preferencia votada con anterioridad: Orden del Día N° 304.

Tratamientos sobre tablas a solicitar

–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional.(S.-1.500/07 y otros.)

–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, expresando reconocimiento a los trabajadores de prensa del país. (S.-1.475/07 y otros.)

–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, adhiriendo al aniversario del fallecimiento de Dolores “Lola” Mora. (S.-1.472/07 y otros.)

–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertización y la Sequía (S.-1.466/07 y otros.)

–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Lucha Contra el Uso indebido y el Tráfico de Drogas. (S.-1.477/07 y otros.)

–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo a la conmemoración del Día del Medio Ambiente. (S.-1.374/07 y otros.)

–Proyecto de declaración del senador Naidenoff, expresando beneplácito por el avance en las investigaciones de la causa “Carrillo”, en Formosa. (S.-1.069/07.)

–Proyecto de declaración del senador Naidenoff, expresando preocupación por las amenazas recibidas por el juez Rozanski. (S.-1.225/07.)

–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Cruz Roja Argentina. (S.-1.600/07 y otros.)

–Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo a la conmemoración del Día del Libro. (S.-1.636/07.)

–Proyecto de comunicación de la senadora Curletti, solicitando las medidas para evitar el cobro del servicio de playa. (S.-1.119/07.)

–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés el II Seminario Internacional Prevención de Accidentes de Tránsito. (S.-1.616/07.)

–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por el 100° Aniversario de la fundación de una escuela en Santa Fe. (S.-923/07.)

–Proyecto de declaración del senador Saadi, expresando reconocimiento hacia la artesana Selva Olinda Díaz de Helguero, premiada en Córdoba. (S.-1.646/07.)

–Proyecto de declaración del senador Saadi, expresando beneplácito por el primer vuelo de un avión de la Fuerza Aérea propulsado por biocombustible desarrollado en nuestro país. (S.-1.490/07.)

–Proyecto de declaración del senador Urquía, declarando de interés el 3er. Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”. (S.-736/07.)

–Texto unificado en varios proyectos presentados por diversos senadores celebrando el 50° aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (S.-4.482/06 y otros.)

–Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, expresando beneplácito por la trayectoria del profesor Sanabria. (S.-1.243/07.)

–Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, adhiriendo al aniversario del Día del Gendarme Infantil Argentino y la Creación de la Agrupación Ayui de Gendarmería Infantil, de Concordia, Entre Ríos. (S.-385/07.)

–Texto unificado en varios proyectos presentados por diversos senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera. (S.-1.493/07 y otros.)

–Proyecto de declaración del senador Jenefes, declarando de interés el II Foro Latinoamericano de Montaña. (S.-962/07.)

–Proyecto de declaración del senador Jenefes, adhiriendo a la fiesta Inti Raymi o Fiesta del Sol. (S.-1.412/07.)

–Proyecto de declaración del senador Jenefes, expresando beneplácito por el 100° aniversario de una escuela en Jujuy.(S.-1.413/07.)

–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, por el cual se saluda a todos los pueblos y comunidades indígenas asentados en el país al celebrarse un nuevo año. (S.-1.570/07.)

–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés la Primera Edición del Premio Nacional Güemes, Héroe Nacional. (S.-1.335/07.)

–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil y Día Nacional Contra el Trabajo Infantil. (S.-1.266/07.)

–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo al VII Congreso Provincial Vecinalista. (S.-363/07.)

–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial. (S.-1.269/07.)

–Proyecto de declaración de la senadora Viudes, declarando de interés el concurso de Integración de Pesca del Surubí 2007. (S.-1.649/07.)

–Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a un nuevo aniversario del día que conmemora la afirmación de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. (S.-1.682/07.)

–Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Bella Vista, Corrientes. (S.-1.683/07.)

–Proyecto de declaración de la senadora Viudes, declarando de interés la participación del alumno Matías Saucedo en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. (S.-1.622/07.)

–Proyecto de declaración de la senadora Viudes, rindiendo homenaje a D. José Hernández. (S.-1.623/07.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giri, declarando de interés las actividades educativas organizadas por la Asociación Civil de Diabetes Argentina. (S.-1.710/07.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giri, declarando de interés el I Congreso Internacional Sobre Víctimas de Delitos Contra la Integridad Sexual y IV Curso de Actualización. (S.-1.709/07.)

Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan de labor.

4

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo establecido por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta hoy.

5

MOCION DE PREFERENCIA - CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES CULTURALES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodolfo Terragno.

Sr. Terragno. – Señor presidente: en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de este cuerpo solicito preferencia, con dictamen de comisión, para la consideración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional contenido en el expediente P.E.-68/2007, por el que se aprueba la convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 20 de octubre de 2005 y suscripta por la República Argentina en la misma fecha.

Dicha convención tiene como antecedente un proyecto de la señora senadora Perceval y otros, contenido en el expediente S.-2.472/2006.

Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por el señor senador Terragno, con dictamen de comisión.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.

6

MOCION DE PREFERENCIA - PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LOS BOSQUES NATIVOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rossi, por la provincia de Córdoba.

Sr. Rossi. – Señor presidente: tal como adelantara ayer en la reunión de labor parlamentaria, quiero pedir el tratamiento preferencial para la consideración, con dictamen de comisión, dentro de dos sesiones ordinarias del proyecto de ley que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados relacionado con los presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques nativos.

Este proyecto de ley que, como hice público en su momento, comparto, debe tratarse en varias comisiones, en las cuales en este momento se encuentra en estudio. Inclusive, hay varios proyectos relacionados con el mismo tema que, obviamente, deberán considerarse juntamente

fundación de la Universidad Católica de Santa Fe.

O.D.- 296: Homenaje y reconocimiento, en su 120° aniversario, al Rosario Rowing Club.

O.D.- 297: Repudio y condena a la última dictadura militar al cumplirse 30 años de su inicio.

O.D.- 298: Adhesión al Día Internacional de los Derechos del Consumidor.

O.D.- 299: Citación al director nacional de Migraciones a una audiencia con los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías.

O.D.- 300: Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

O.D.- 301: Adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

Sr. Presidente. – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.¹

13

AMPLIACIÓN DE LICENCIA POR ENFERMEDAD DE UN SEÑOR SENADOR

Sr. Presidente. – A continuación corresponde considerar el pedido de ampliación de licencia por enfermedad hasta el 30 de junio, solicitada por el señor senador Falcó.¹

Sr. Pichetto. – Con goce de haberes.

Sr. Presidente. – En consideración el pedido de ampliación de licencia, con goce de haberes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

14

PENALIZACIÓN DE ASOCIACIONES ILÍCITAS TERRORISTAS Y SU FINANCIAMIENTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los órdenes del día con proyectos de ley. En primer

lugar, el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico y de Economía Nacional e Inversión en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre penalización de asociaciones ilícitas terroristas y su financiamiento. (Orden del Día N° 306.)

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: vamos a tratar hoy un proyecto del Poder Ejecutivo, que cuenta con dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Economía Nacional e Inversión, sobre penalización de las asociaciones ilícitas terroristas y la financiación del terrorismo. En la elaboración de este proyecto del Poder Ejecutivo han intervenido el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Nación.

Asimismo, queremos dejar expresado también nuestro agradecimiento a quienes han intervenido en este debate en la comisión. Me refiero al doctor Félix Marteau, que es el representante argentino ante el GAFI; al doctor Fernando Córdoba, que ha venido de la Procuración General de la Nación para ayudarnos a debatir la dogmática de este proyecto, y a los representantes del CELS, que también se hicieron presentes y acompañaron un informe vinculado a esta iniciativa.

En primer lugar, deseo plantear que el proyecto del Poder Ejecutivo se elabora en el marco de institucionalización de una política de Estado iniciada por el gobierno, que lleva adelante la Argentina en el mundo, y que debemos plasmar normativamente.

En ese sentido, el mensaje presidencial del 1° de marzo de 2006 establece los ejes centrales de la Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. En ese momento, el presidente dijo: “Enfrentamos al terrorismo internacional, a la delincuencia transnacional organizada y al narcotráfico alentando todas las acciones internacionales que contribuyan a la persecución, control y eliminación de estos flagelos, respetando el derecho internacional de los derechos humanos”.

En el mismo sentido, al inaugurar la IV Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, el presidente hizo referencia a este tema y expresó:

¹ Ver el Apéndice.

“Un capítulo especial merece la obtención de consenso respecto de la lucha contra el terrorismo. La Argentina considera todos los actos de terrorismo criminales e injustificables. No hay ninguna razón racial, religiosa, ideológica o de cualquier otra naturaleza que pueda justificar el asesinato de civiles inocentes. Los argentinos tenemos un profundo sentimiento de solidaridad con las víctimas del terrorismo en el mundo y con sus familiares. Fuimos víctimas en los casos de la embajada de Israel y la AMIA y comprometemos apoyo permanente a la obtención de la verdad y al combate contra el terrorismo”.

Por su parte, en la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente señaló: “Argentina considera que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables. No se acepta ningún argumento que intente justificar tal metodología. Los argentinos hemos sufrido dos atroces atentados en la década del 90: a la embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que conmovieron nuestra sociedad, y luchamos aún, a pesar del tiempo transcurrido, por lograr el esclarecimiento y castigar a los culpables”.

Más adelante dice: “El respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados es esencial como también lo es la cooperación internacional y la asistencia jurídica, para hacer efectivo el cumplimiento de las normas contra el terrorismo.”

Es precisamente en este marco institucional que el gobierno ha delineado políticas de Estado y que se ha determinado una política criminal para combatir el terrorismo internacional y el financiamiento de las actividades terroristas.

En este sentido, algunos de los ejes centrales de las políticas definidas plantean que los actos de terrorismo son, en todo caso y bajo todo concepto, criminales e injustificables; que la lucha contra la financiación del terrorismo es una prioridad para el Estado nacional argentino y es política de Estado; que esta lucha debe formar parte del consenso internacional multilateral; que el orden jurídico penal interno debe armonizarse con el derecho penal internacional en materia de lucha contra la financiación del terrorismo, y que este proceso de armonización jurídica en materia de cooperación en la lucha contra el terrorismo y

contra la financiación de actos terroristas debe seguir lo establecido por el derecho humanitario reconocido internacionalmente por la comunidad global organizada.

Precisamente, es en este marco que se envía el proyecto del Poder Ejecutivo, que ha obtenido el dictamen favorable de las tres comisiones que mencioné.

Más allá de una profunda convicción en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, la Argentina asumió compromisos con organismos internacionales; es decir que debe cumplir con ciertas obligaciones de orden internacional. En este sentido, nuestro país, como miembro de las Naciones Unidas y del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI–, ha asumido el compromiso de tipificar penalmente el financiamiento del terrorismo.

Como miembro de las Naciones Unidas, la Argentina está obligada a cumplir con las normas de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Cabe destacar que por ley 26.024 hemos aprobado el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo; y en virtud de ello la Argentina, además, forma parte del grupo de países que asume los otros instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo, firmados a partir de la década del 60.

Este convenio internacional –que es el que principalmente nos obliga hoy a considerar esta iniciativa, cuyo tratamiento encaramos con convicción– exige que tipifiquemos en forma autónoma el delito de financiamiento del terrorismo. Esto significa que no podemos dejar librado el castigo del financiamiento del terrorismo a las normas generales de participación y concurso de delitos, sino que debemos crear un tipo penal específico que reprima este ilícito.

En este sentido, el artículo 2º del Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo establece que cualquiera que recolecte fondos con la intención de que se utilicen para actos o delitos comprendidos en los tratados vinculados a la lucha contra el terrorismo debe ser penado y condenado por la normativa interna de los distintos Estados participantes.

Finalmente, este mismo convenio agrega un artículo, que es el que después vamos a discutir y que está vinculado con la dogmática penal. Dicho punto promueve un listado de tratados en

los cuales se establecen los delitos que se consideran vinculados a actos de terrorismo y cuyo financiamiento debe ser penalizado. Así, y entre otros, se mencionan el apoderamiento ilícito de aeronaves, los actos ilícitos contra la seguridad en la aviación civil y los actos de violencia en aeropuertos. En fin, es innumerable la cantidad de tratados; y hay un listado.

Ahora bien, la dificultad de asumir un listado en donde se detallen cuáles son los actos terroristas genera que después el propio convenio diga que cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier persona que no participe directamente en las hostilidades, en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, si en este caso hay financiación, debe existir delito de financiamiento del terrorismo.

Más adelante, en el párrafo tercero del artículo 2º, se establece específicamente que el delito de financiamiento del terrorismo no puede desprenderse de los principios generales de la participación criminal, sino que debe ser un delito autónomo, con un tipo penal propio en el ordenamiento jurídico interno.

Por otra parte, se encuentra vigente la resolución 1.373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, una vez más, exige específicamente el cumplimiento del convenio y que se reprima el financiamiento de los actos terroristas. Por otro lado, figuran las recomendaciones especiales 1 y 2 del GAFI, que exigen la tipificación autónoma del delito de financiamiento y que ello no quede vinculado a la teoría de participación y de concursos.

Existe un problema que considero que es el tema central de este asunto, que seguramente abordaremos acá, porque hasta esta parte creo que hay un alto consenso con relación a esta cuestión, que se refiere a cómo caracterizamos los actos terroristas; o sea, cómo se incorpora la posibilidad de criminalizar la financiación de un acto terrorista y cómo delineamos qué significa este acto terrorista.

En ese sentido, tenemos la definición de terrorismo que brinda la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Financia-

ción del Terrorismo que, como dije, incluye en primer lugar un listado de tratados en los cuales se mencionan delitos vinculados directamente con actos terroristas y donde se afirma que quien financie esos actos terroristas debe quedar incurso en el delito de financiamiento al terrorismo. En segundo lugar, establece un tipo general donde se incluye "cualquier otro acto destinado a cometer delitos con el propósito de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".

De ese modo, se incorpora un elemento subjetivo. O sea, se efectúa una caracterización de lo que es un acto terrorista; se le da el objetivo de realizar delitos terroristas y se establece un elemento subjetivo, que es la ultraactividad, que es que tengan la finalidad de intimidar a una población, obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Esta idea de definición con un elemento subjetivo de la ultraactividad, del objetivo o propósito final del acto, es aquello que determina la finalidad por la cual se define un acto terrorista.

Se ha planteado en el ámbito internacional la forma en la cual se incorpora al derecho interno el acto terrorista, porque lo cierto es que esto comprende una decisión muy compleja. De hecho, existen tratados sobre los cuales se ha trabajado con respecto a los actos terroristas. Pero a la hora de incorporarlos al ámbito interno, debemos encontrar una definición que por un lado permita trabajar y encontrar a quienes financian los actos de terrorismo y, por el otro lado, tenga techos y clausuras que impidan que este tipo penal se utilice para criminalizar o penalizar otro tipo de actividades delictivas de organizaciones de crimen organizado o para la penalización de actividades de protesta violenta.

En este sentido, las soluciones en el derecho penal comparado han sido distintas. En el marco del Consejo de la Unión Europea sobre Lucha Contra el Terrorismo de 2002 se optó por la definición del delito de terrorismo, consistente en los actos internacionales que, por su naturaleza o contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización internacional cuando su autor los cometa con el fin de —y aquí se incluye la finalidad— intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a

realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional.

Pero más adelante, el Consejo de la Unión Europea también realiza un listado de las conductas a las cuales enumera como posibles atentados terroristas que se vinculan con esta finalidad, que van desde el atentado contra la vida hasta la toma de rehenes.

En definitiva, el Código Penal alemán adopta una definición muy similar a la que propone actualmente el Poder Ejecutivo nacional, que consiste en tomar una definición, darle una visión de propósito y una noción de clausura a esto, con todos los requisitos específicos de una organización o asociación ilícita terrorista. Es decir, se busca la vía de la asociación ilícita terrorista con todos los requisitos exigidos normativamente y, a partir de allí, se penaliza a quienes financien la asociación ilícita o a los integrantes de esta asociación ilícita.

En el mismo sentido, el Código Penal italiano y el Código Penal español optan por este tipo de definiciones, a diferencia de Francia, que sí hace un listado de delitos que se consideran actos terroristas.

El proyecto que envía el Poder Ejecutivo introduce la penalización de asociaciones ilícitas terroristas y el financiamiento de estas asociaciones o de sus integrantes. Para armonizar normativamente la materia internacional y el orden normativo interno se identifica la financiación del terrorismo con una conducta ilícita autónoma que ya no depende de la participación criminal, sino que la fijamos como un tipo penal propio o autónomo, que va a ser el artículo 213 ter, que estamos incorporando al Código Penal.

Finalmente, para tornar posible jurídicamente la sanción penal del financiador del terrorismo, incorporamos el artículo 213 quáter, que establece la penalización de quienes financien la asociación prevista en el artículo 213 ter. De este modo, para no dañar la lógica estructural de nuestro Código Penal, damos precisión al concepto de terrorismo a través de la figura de la asociación ilícita calificada, agregando el artículo 213 ter, e incorporamos la financiación del terrorismo en el artículo 213 quáter.

Es debatible, y se ha debatido mucho, la utilidad, la justicia de utilizar la figura de la asociación ilícita. En principio parece razonable por nuestra historia, por nuestra dogmática penal y por la lógica estructural de nuestro Código Penal que se haya utilizado la figura de la asociación ilícita, que tiene una tradición en nuestro Código Penal, no sólo por la actual redacción del artículo 210 del Código, que viene desde el año 1921, sino porque además en el año 1984, cuando a través de la ley 23.077 se incorporaron como delitos de los atentados contra el orden constitucional, luego de haber vivido todo el período de dictadura militar, se utilizó también la figura de la asociación ilícita agravada. O sea que este concepto de asociación ilícita tiene una tradición en la dogmática de nuestro Código Penal. Se trata de una figura para tutelar el bien jurídico orden público, que autoriza un adelantamiento en la punibilidad de actos preparatorios de delitos entendiendo que son peligrosos para terceros y lesivos del bien jurídico orden público.

En el ámbito jurisprudencial tenemos ya recibida a lo largo de los años una vasta decisión de distintos jueces y de distintas instancias, que establecen requisitos constitutivos de la asociación ilícita, que tiene que existir un acuerdo de una pluralidad de tres o más individuos para la consecución del objetivo delictual, que tiene que establecerse un determinado nivel de organización para la toma de decisiones, la existencia de un determinado programa de acción y la perdurabilidad en el tiempo de la adhesión de los miembros.

Hay quienes atacan la idea de la figura de asociación ilícita en general, que ya existe en nuestro Código y que no estamos creando por esta ley, por entender que puede representar una erosión al principio de reserva, o que ha tenido un uso abusivo en un factor que habilita la prisión preventiva. Pero la asociación ilícita en este caso, como forma de poder contemplar las actividades terroristas y penalizar su financiamiento, parece, al menos, por nuestra tradición dogmática, la figura más adecuada en el ámbito de nuestra lógica interna del Código Penal.

Con esta ley incorporamos el artículo 213 ter, que tipifica la figura de asociaciones ilícitas terroristas y que prevé una pena de cinco a veinte años al que tomare parte de la asociación ilícita,

es decir que el tipo penal es de mero peligro, es tomar parte de la asociación ilícita terrorista, independientemente de que después se cometan o no los actos terroristas. En ese caso sí habría una penalización por concurso real. Y se agrega la exigencia de que se reúnan algunas características.

Esto es muy importante porque, en realidad, lo que se está estableciendo es un límite, una cláusula dura para que no pueda extenderse la aplicación de la figura de la asociación ilícita terrorista a otro tipo de delitos o de actos violentos de protesta social, como en algunos casos se temió que pudiera ser utilizada, cosa que queda descartada de plano con la sola lectura del texto.

El artículo 213 ter, que se incorpora por ley en caso de aprobarse este proyecto, exige que la asociación ilícita tenga como propósito —mediante la comisión de delitos— “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características...”. Aquí se establecen requisitos normativos y fácticos que debe reunir la asociación ilícita terrorista: “Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; estar organizada en redes operativas internacionales; disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas”. A su vez, se aumenta el mínimo a diez años de reclusión o prisión para quienes fueren fundadores o jefes de la asociación.

Por otra parte, la incorporación del artículo 213 quáter tipifica el financiamiento de estas asociaciones ilícitas terroristas o de sus miembros, y establece la pena de reclusión o prisión de cinco a quince años para quien recolectare o proveyere bienes o dinero por el medio que fuese, “con conocimiento de que serán utilizados en todo o en parte, para financiar a una asociación ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento”.

Es importante destacar que también planteamos que el delito de financiamiento, cumpliendo

con nuestras obligaciones internacionales, es un delito autónomo. El solo hecho de financiar a la asociación ilícita terrorista o al miembro de dicha asociación, conociendo que eso es para cometer actos de estas características, implica la comisión del delito, independientemente de que después se cometa el acto terrorista o no. Estalle o no la bomba, el hecho de haber financiado a la asociación ilícita terrorista implica que quien lo hizo quede incurso en el delito de financiamiento de la asociación ilícita. De este modo estamos cumpliendo con las exigencias internacionales en la materia.

Finalmente, el hecho de establecer la reclusión o prisión de cinco a quince años por financiamiento del terrorismo genera dos escalas penales. Esta escala penal autónoma constituye, además, un piso para el financiamiento del terrorismo. Si alguien financia una acción terrorista que, finalmente acaecida, sólo tiene como resultado daños materiales, en ese caso podría considerarse el delito de daño o algún otro según las reglas de la participación y de la autoría. Pero actualmente, por el solo hecho de haber financiado la asociación ilícita, más allá del resultado acaecido, la pena nunca podrá ser inferior a cinco años, y tiene la escala de cinco a quince años porque existe el delito autónomo, que establece que el piso es de cinco a quince años.

A través del proyecto en consideración se reforma también la ley 25.246, que es la que reglamenta la UIF, a la cual se le da no sólo la prevención con relación al lavado de activos, sino también al financiamiento del terrorismo. Es por ello que adecuamos y modificamos algunos artículos de dicha norma como, por ejemplo, el artículo 6º, a efectos de que la UIF sea la encargada del “análisis, el tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir o impedir el delito de lavado de activos, los delitos que allí se mencionan y el financiamiento de las asociaciones ilícitas terroristas, y todo lo que se vincule a información, denuncia, y la instalación de acciones penales queda a cargo de la UIF”.

A pedido de la señora senadora Sonia Escudero, y con un criterio que todos hemos acordado, se ha quitado el mínimo, que para lavado de dinero era de 50 mil pesos. Entendemos que si se financia el terrorismo no importa cuál es el monto del financiamiento que se involucra. Debe

ser investigado por la UIF y debe haber también intervención del Ministerio Público para la instigación de la acción penal en materia de investigación del delito de financiamiento del terrorismo.

Finalmente, se modifica la ley 25.241, sobre reducción de penas a quienes colaboren en la investigación de hechos del terrorismo. Esta modificación es necesaria a fin de no tener en nuestra dogmática penal dos definiciones distintas de terrorismo, ya que la mencionada ley había ensayado una definición de actos terroristas que no sólo había sido muy cuestionada sino que, además, no cumplía con los estándares internacionales.

Con la propuesta generada desde el Poder Ejecutivo de seguir el camino de la asociación ilícita terrorista, esto es, la figura agravada de asociación ilícita, se cumple con los estándares internacionales.

Finalizo mi exposición dejando de manifiesto que con la aprobación de esta norma la Argentina va a dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales; va a contar con las herramientas en el ámbito nacional para la investigación del financiamiento del terrorismo, para colaborar activamente en el ámbito internacional con una política de Estado, como lo es en nuestro país la lucha contra el terrorismo y su financiamiento; y, finalmente, para cumplir con las recomendaciones realizadas en el marco de las Naciones Unidas y del GAFI.

Por último, solicito autorización para insertar mi discurso en lo que hace a la parte de análisis dogmático y derecho comparado. Luego reservo para el cierre del debate de hoy las contestaciones de las argumentaciones vinculadas con las observaciones que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales y algunas disidencias parciales que se han recibido sobre la iniciativa en cuestión.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: como se acaba de decir, la condena al terrorismo ha sido y es una política de Estado en la Argentina. El 17 de marzo de 1992 y el...

Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

Sra. Escudero. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero plantear el cierre de la lista de oradores. Creo que hay tres oradores anotados.

Por otra parte, también solicito que se autoricen las inserciones.

Sr. Presidente. — Están anotados los senadores Escudero, Giustiniani y Naidenoff.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el cierre de la lista de oradores.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Queda cerrada la lista de oradores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la inclusión de las inserciones.

— Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Quedan autorizadas las inserciones.¹

Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Decía, señor presidente, que el 17 de marzo de 1992 y el 22 de julio de 1994 son fechas que quedaron y quedarán grabadas en la memoria de los argentinos.

La voladura de la embajada de Israel y de la AMIA puso a la Argentina en este nuevo escenario, el del terrorismo internacional que no reconoce fronteras. Un conflicto en otra parte del mundo encuentra como escenario una respuesta en la Argentina.

Este fenómeno se va generalizando y encuentra su expresión más impresionante el 11 de septiembre con la voladura de las Torres Gemelas, en los Estados Unidos, con un saldo de tres mil muertes.

Este fenómeno del terrorismo internacional significa entonces que el mundo es el escenario, hay traslado de personas y de dinero. Por eso, desde un principio se empieza a poner el acento en la financiación del terrorismo. ¿Y de qué modo se controlan esos fondos destinados al traslado de personas y de dinero que permiten la realización de los atentados terroristas? En 1999, en el ámbito de las Naciones Unidas, se aprueba la Convención contra la Financia-

¹ Ver el Apéndice.

ción del Terrorismo, que nuestro país ratificó recién en el año 2005.

Producidos los hechos del 11 de septiembre, Naciones Unidas dicta la resolución 1.373, que nuestro país ratifica por decreto 1.235 en el año 2001. Finalmente, en el año 2000 la Argentina ingresa en el Grupo de Acción Financiera Internacional. Estos son los tres hechos internacionales ratificados por la Argentina que nos obligan a tipificar en nuestro Código Penal el financiamiento del terrorismo, a cooperar con los otros países en materia de investigación de financiamiento del terrorismo y a tomar algunas medidas y algunas exigencias con relación a las entidades financieras, justamente, para el control de estos hechos.

Lo que se nos pide en materia de financiación del terrorismo es que se tipifique como una figura autónoma, no dependiendo de las reglas de la participación, y que se pueda penar y sancionar al financiador con independencia de que el acto terrorista se haya llevado a cabo o no. La primera definición que hay en nuestro derecho en materia de terrorismo la tenemos en la ley 25.241, que es la llamada ley del arrepentido, cuando, justamente, nos damos cuenta de que para la investigación de los hechos terroristas de los que fue víctima la Argentina con nuestra propia legislación no era suficiente frente a la complejidad y gravedad de este nuevo fenómeno. Así, nuestro país aprueba la ley del arrepentido, que dice que a los efectos de la presente ley se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas cometidas por integrantes de asociaciones ilícitas u organizaciones constituidas con el fin de causar alarma o temor, y que se realicen empleando sustancias explosivas, inflamables, armas o, en general, elementos de elevado poder ofensivo, siempre que sean idóneos para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Es decir que ya en la legislación aprobada por nuestro Congreso existe el enfoque de la asociación ilícita terrorista.

Desde hace cuatro años, nuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico analiza el fenómeno del terrorismo y cuál es la mejor forma de enfocar y de incorporar a nuestro derecho penal todas las obligaciones internacionales que la Argentina ha asumido. Nuestro país ha ratificado prácticamente todas las convencio-

nes internacionales relativas al tema del terrorismo. Había distintas alternativas: estamos todos de acuerdo en que todos los actos terroristas que describen las convenciones internacionales que hemos ratificado ya están de alguna forma penalizados por nuestro Código Penal. Lo que no está alcanzado por ninguna figura del Código Penal es, justamente, la financiación del terrorismo.

Entonces, hay absoluto consenso en que había que tipificar la financiación del terrorismo.

Pero, ¿cómo podemos tipificar la financiación del terrorismo si no nos pusimos de acuerdo o si no tenemos tipificado qué es el terrorismo?

La verdad es que en el mundo todavía no hay una posición única con relación a la tipificación del terrorismo. Hay consensos en cuanto a cuáles son los actos terroristas, pero la gran complejidad existe en la diferencia entre quién es un terrorista y quién es un grupo que lucha por la liberación de su país ocupado. Por eso es que el enfoque es tan difícil y ha llevado tantos años para alcanzar un consenso.

Realmente, el proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo satisface todas las inquietudes que se habían planteado en el seno de la comisión; en primer lugar, porque parte de una figura que ya existe en nuestro Código Penal. La figura de la asociación ilícita existe en nuestro Código Penal desde 1921 y, si bien ha merecido algunas críticas de parte de la doctrina, nunca ha sido declarada inconstitucional por nuestro tribunal supremo. De modo que el proyecto parte de la figura de la asociación ilícita, que ya existe en nuestro derecho, y toma una forma agravada de asociación ilícita.

Existe en nuestro derecho otra forma agravada de asociación ilícita en la Ley de Defensa de la Democracia, sancionada en 1984. En ese momento se establece como figura típica una asociación ilícita cuando tenga por finalidad atacar contra el orden constitucional.

Repito: en 1984 este Congreso aprobó una norma que sí es absolutamente abierta. Sin embargo, nunca fue declarada inconstitucional.

Lo que propone el Poder Ejecutivo es que el artículo 213 ter del Código Penal tome como requisitos para que se configure la asociación ilícita terrorista los de la figura básica, es decir, la reunión de más de dos personas, el hecho objetivo de cometer actos ilícitos, de cometer

delitos, y otros elementos, dos subjetivos y dos objetivos.

El primer elemento subjetivo es el propósito de generar terror u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer algo o no. El proyecto del Poder Ejecutivo habla de generar terror, no de intimidar o generar temor, como lo dicen los convenios internacionales. El estándar del proyecto es mucho más duro: generar terror, aterrorizar.

El segundo elemento subjetivo es que tenga entre sus propósitos propagar el odio racial, religioso o político. Aquí el estándar que exige el proyecto es mucho más duro que el de los convenios. En los convenios se habla de motivación religiosa, política o étnica. En el proyecto se habla de odio, lo cual es un estándar mucho más duro.

Hay otros dos elementos objetivos que también son acumulativos. En primer lugar, que haya organización internacional. No hay asociación ilícita terrorista si no hay una estructura organizativa internacional, con lo cual dejamos fuera cualquier forma de organización interna, por violenta que sea, que estará comprendida con otras de las figuras de nuestro Código Penal.

El último objetivo es tener armas de guerra, armas que sean de poder letal suficiente para poner en peligro la vida o la integridad física de un número indeterminado de personas.

De modo que es una figura cerrada, dura, que de ningún modo la doctrina o la jurisprudencia podrán hacer extensiva a otras situaciones que no sean estos hechos gravísimos de terrorismo internacional.

La doctrina cuestiona la figura de la asociación ilícita, porque dice que hay una antelación de la punición del Estado. El Estado aparece reprimiendo antes de que se produzca el hecho.

Justamente, tratándose del terrorismo es lo que queremos lograr. No queremos que sea tarde, que el acto terrorista se realice y tengamos la pérdida de miles de vidas humanas para recién actuar. Le queremos dar a las fuerzas y a la Justicia los elementos suficientes para poder actuar a tiempo, para poder detener a organizaciones terroristas cuando están preparando actos terroristas, que no son otra cosa que una guerra de los no Estados contra los Estados. Por eso, a pesar de ser tan amplio el arco ideológico en nuestro mundo, todos los países se pro-

nuncian en contra del terrorismo. Tendrán matices en cuanto a la definición, pero todos, absolutamente todos, se pronuncian en contra del terrorismo.

El artículo 2º del proyecto se refiere a la financiación de estas asociaciones ilícitas terroristas, que están perfectamente descritas en el artículo anterior.

Finalmente, el proyecto plantea las adecuaciones necesarias a la ley que crea la Unidad de Información Financiera, justamente para darle potestades y competencias a dicha unidad en el control que hace de operaciones de lavado de dinero, para que también las haga en materia de financiación del terrorismo.

En la comisión introdujimos algunas reformas, que fueron aceptadas, relativas a penalizar, sancionar a las entidades financieras que permitan estos actos de financiación del terrorismo con penas mucho más graves que en el caso de lavado de dinero.

Con la diferencia, también, respecto de si el acto fue cometido en forma dolosa o culposa.

Lo que hay que realizar es una pequeña adecuación en un artículo. Pido que se tome nota para el momento de votar, porque se deslizó un error material en el dictamen, en el artículo 8º, apartado 2, cuando dice: "Cuando alguno de los hechos hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos del Código Penal...", hay que eliminar la expresión "del Código Penal".

Ese es un pequeño error material que se deslizó.

Finalmente, por supuesto, esa descripción que teníamos en la ley 25.241, de hechos terroristas, queda adecuada a esta nueva definición de organizaciones ilícitas terroristas.

Para finalizar, quiero decir que no me cabe la menor duda de que la Argentina tiene que dar este paso, que es un paso más de todos los que ya dimos en esta posición absolutamente clara de nuestro país, de lucha contra el terrorismo.

Pero también coincidimos en que no es lo único que hay que hacer. Estamos de acuerdo con la posición de Naciones Unidas, que sostiene que si la única medida que vamos a tomar frente a estos hechos de terrorismo es perseguir a los terroristas, obviamente estaremos fracasando.

Estamos asistiendo a un nuevo orden en el mundo. A partir de 1989 se produce no solamente el final del comunismo y la caída del muro, sino también un nuevo orden, donde ya no existe el balance de poderes. Si hoy el balance de poderes va a ser entre naciones que tienen todas la bomba nuclear y naciones que tienen todas armas de destrucción masiva, ése no es el balance que queremos.

Si hablamos de un poder hegemónico, justamente, este poder hegemónico genera mucho más odio y más resentimiento. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un nuevo orden internacional que tenga que ver con la alianza entre las naciones, con el diálogo intercultural, con el respeto de la diversidad. Y justamente, tiene que ver también con empezar a solucionar los problemas y los resentimientos que están generando más razones para que todos los grupos extremistas recluten más terroristas.

Quiero compartir una recomendación del Grupo de Alto Nivel convocado por el secretario de Naciones Unidas para analizar la cuestión de la alianza de las naciones frente a este nuevo mundo.

Entre las recomendaciones respecto de lo que hay que hacer, expresa: "SeSENTA años después de que, en 1948, las resoluciones de Naciones Unidas allanaron el terreno para la creación y reconocimiento de Israel, la comunidad de naciones pide una solución justa y duradera sin más dilaciones. Esta solución se basará en tres circunstancias al día de hoy irrefutables: la existencia del movimiento nacional palestino, del que sabemos, ni el tiempo ni la fuerza ni el dinero podrán doblegar en su determinación por fundar un Estado digno, respetado y dotado de todos los instrumentos de soberanía; la existencia del movimiento nacional judío, que alcanzó sus objetivos en Israel y en una parte de Palestina, y del que también sabemos que ni el terrorismo ni las guerras ni las presiones internacionales conseguirán rendirlo, y la voluntad de todos, y sobre todo de la mayoría de los árabes, los palestinos, el pueblo de Israel y los judíos en todo el mundo, de aceptar y apoyar cualquier solución digna, justa y ética que brinde una verdadera oportunidad de coexistencia entre los dos Estados: el Estado palestino y el Estado de Israel".

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación, doctor Marcelo López Arias.

Sra. Escudero. — Una de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel: penalizar el terrorismo, penalizar el financiamiento del terrorismo, perseguir a los terroristas, pero al mismo tiempo trabajar sobre las razones del odio, sobre todas las razones de injusticia que están en la base de la generación de este fenómeno que todos repudiamos.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente...

Sr. Giustiniani. — Voy a intentar ser breve, señor presidente...

Sr. Presidente (López Arias). — Perdón, señor senador...

Sr. Giustiniani. — Sí...

Sr. Petcoff Naidenoff. — ¿Me permite, senador?

Sr. Giustiniani. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente (López Arias). — Entonces, tiene la palabra el senador Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical comparte la necesidad y la preocupación del Poder Ejecutivo nacional de contar con un marco normativo para dar cumplimiento a los compromisos asumidos con los organismos internacionales a efectos de disponer de una ley que prevenga las actividades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.

Sabemos que es necesaria la aprobación. Conocemos los compromisos que se han asumido.

Así que, en función de este debate necesario por parte del Senado de la Nación, nosotros hemos acompañado, pero firmamos en disidencia el dictamen de la mayoría, en el entendimiento de que tenemos observaciones que formular. Dichas observaciones quizás hacen al fondo de la cuestión pero no van a impedir nuestro acompañamiento a la hora de votar, porque justamente queremos priorizar el cumplimiento del país de los compromisos que se asumieron. No obstante este compromiso, nos parece central señalar algunas observaciones que quizás no son menores.

Creo que de antemano hemos tomado o incorporado un tipo penal como el del terrorismo en el marco de la asociación ilícita, como una figura jurídica calificada o agravada quizás con cierto apresuramiento, dejando de lado cuestionamientos

serios de carácter doctrinario, así como jurisprudencial, y también omitiendo—por qué no decirlo— algunas consideraciones y proyectos del propio Poder Ejecutivo nacional.

El Poder Ejecutivo nacional, allá por 2004, acercó al ámbito de este Senado un proyecto de ley tendiente a modificar la figura de la asociación ilícita; también, ciertos conceptos que tienen que ver con las conductas, definición y fundamentalmente con las penas. De hecho, al hablar de la asociación ilícita lo estamos haciendo respecto de una figura jurídica muy controvertida que se ha prestado a una desnaturalización de la propia esencia que se tuvo quizás allá por 1921, cuando se le dio una amplia acogida en nuestro ordenamiento. En tal sentido, considero que fundamentalmente esa falta de interpretación adecuada ha llevado, respecto de esta figura, a cometer errores tan profundos que fueron tergiversados en los hechos con un uso abusivo de una figura fundamental en nuestro derecho, como es la prisión preventiva.

No obstante, creo importante centralizar estas observaciones y focalizarlas, porque desde el punto de vista doctrinario el propio proyecto del Poder Ejecutivo nacional, en los fundamentos, señala que aunque la figura de la asociación ilícita ha debido afrontar objeciones relativas a la posible erosión del principio de reserva, justamente por el uso abusivo que se dio al habilitar las prisiones preventivas, considera que están dadas las características jurídicas como para ampararla.

Sinceramente y con absoluta humildad creo que esto no es así: que la inmensa opinión doctrinaria no está de acuerdo con la figura de asociación ilícita y las características de un delito tan particular como es el terrorismo.

Estoy plenamente convencido de que tenemos que encuadrarlo y darle el marco normativo adecuado que requiere por su tipificación, por la pluralidad de sujetos, por el objetivo común y por la conexión con redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, pero quizás lo más adecuado habría sido contar con una figura autónoma, con un tipo penal concreto, con una ley especial complementaria que dé cabida a otro tipo de situaciones que esta modificación legislativa no contempla, porque estamos incorporando una figura jurídica calificada en los artículos 213 ter y 213 quáter del Código

Penal, que me parece que no va a solucionar la cuestión de fondo, independientemente—repeto—de que el bloque de la Unión Cívica Radical, para dar cumplimiento a los compromisos que asumió el Estado con los organismos internacionales, más allá de esta disidencia, va a acompañar.

Los cuestionamientos doctrinarios no sólo tienen que ver con el adelantamiento de la punibilidad, que muy bien han explicado los miembros informantes de la bancada del oficialismo, sino también con el hecho de que la asociación ilícita tipifica un delito de peligro en abstracto. Es decir, no se tipifica un peligro concreto o una conducta delictiva. Es más, la propia doctrina considera que éste es un delito que muchas veces ni siquiera encuadra en el marco de la tentativa, sino que es un delito de “ideación”. Y por el solo hecho de encuadrarse como un delito de “ideación”, no significa que su propia concreción conlleve una transgresión donde la sanción penal deba llegar con rigurosidad.

Esos son los fundamentos doctrinarios que han llevado justamente, no a la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero sí a la Cámara, a establecer su inconstitucionalidad. Ese fue el caso del Tribunal Oral Penal Federal N° 1, donde al analizar la figura de la asociación ilícita no solamente dejaba constancia de que se presta a múltiples interpretaciones, sino también algunas de ellas factibles hasta de persecución política, porque vemos a diario cómo se construyen los sumarios y se encuadra mediante esta asociación ilícita, que no es excarcelable, y cómo termina la cosa. Es decir, estamos hablando de una figura jurídica que en el marco del derecho penal es muy controvertida.

Tan controvertida es que el Poder Ejecutivo en el 2004 elevó el proyecto 174, que proponía la modificación del artículo 210 del Código Penal, del delito de asociación ilícita respecto de las penas y otras cuestiones. En su larga fundamentación de por qué el Poder Ejecutivo hace un par de años consideraba necesario modificar esta figura, decía que, más allá de los esfuerzos o las expectativas del Estado nacional en cuanto a su encuadre justo en el marco de un juicio con todas las garantías, lo real y concreto es que no se dan las garantías en los juicios ni tampoco una eventual condena de los involucrados por la característica particular de la asociación ilícita.

En el 2004 el Poder Ejecutivo proponía —no me voy a extender en la fundamentación porque quienes han tratado ese proyecto seguramente lo conocen— suprimir el término “banda”, como referencia sinónímica a la “asociación”. La segunda modificación incorporada en el proyecto consistía en reemplazar el concepto de “delito” por “planes delictivos indeterminados”, justamente por la caracterización de la asociación ilícita. Por último, proponía una modificación que, a mi modo de ver no es menor, se refería al bien jurídico protegido, porque el bien jurídico que se protege, desde la asociación ilícita calificada, como el terrorismo, es el orden público. El bien jurídico es el orden público pero a su vez está vinculado con otros bienes jurídicos que se protegen contra el acto del terrorismo como son la vida, la libertad, la seguridad o el patrimonio.

¿Qué proponía el Poder Ejecutivo con muy buen criterio en 2004? Que el delito se lo tenga por consumado cualquiera sea el bien jurídico que se tienda a proteger, porque si centralizamos el bien jurídico en el orden público es difícil diferenciar muchas veces el acto del terrorismo con connotaciones internacionales, o el que hoy estamos tratando, del acto de subvertir el orden constitucional, donde está en juego el orden público; puede estar en juego el orden público, pero no actos de terrorismo en sí.

El Poder Ejecutivo puntualizó, justamente por el propio peso de la opinión de la doctrina, seguramente por los fallos y la realidad, en el marco del estado de derecho, que la figura de la asociación ilícita no solamente es controvertida sino que merece ser reformada.

Lamentablemente, consideramos que ante esta situación lo más justo hubiera sido contar con una ley especial que contemplara lo que las propias comisiones del Honorable Senado de la Nación trataron con seriedad, fundamentalmente la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Es decir, cuando trató el año pasado, si no me equivoco, medidas concretas o algunas herramientas de política de terrorismo en materia internacional; y creo que fueron medidas acertadas.

Ahora bien, si nosotros, en vez de modificar o incorporar una asociación ilícita calificada en el Código Penal—como es el caso del terrorismo y de su financiamiento—, hubiéramos avanzado con la sanción de una ley especial que contemplara medidas de acción de carácter político,

procesal y judicial, quizá hubiese sido más adecuado. Repito: se legislaría con el mismo sentido en cumplimiento de los compromisos contraídos y con el mismo espíritu que tuvo el Poder Ejecutivo nacional cuando remitió este proyecto de ley, pero con un marco normativo concreto para conceptualizar ciertas características que comprenden al terrorismo en sí y que no se dan con la asociación ilícita, tal como lo establece el Código.

En el dictamen emitido en el año 2005 por la Comisión de Seguridad Interior, me permití señalar algunas herramientas que considero adecuadas; aunque, quizá, hubiera sido adecuado contemplarlas en una ley especial. Sin embargo, creo que son importantes porque hay un vacío legal en este sentido. En ese dictamen se avanzaba en la creación de una unidad de prevención en el ámbito del Ministerio del Interior. Creo que era una unidad de prevención con amplios mecanismos de investigación, que involucraba a otras agencias del Estado en delitos contra la seguridad interior, y que también elaboraba un Plan Nacional de Prevención de Acciones Delictivas Terroristas que debía ser aprobado anualmente por el presidente de la Nación. Cabe destacar que, precisamente, el director de esta unidad de prevención asumía el compromiso de elevar a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso las informaciones que se recababan con relación a las actividades terroristas y a los avances en materia de investigación.

Yo creo que eso hoy no lo contempla, y es importante. Digo esto porque si hubiéramos contado con una ley especial, hubiésemos dado cabida al espíritu del proyecto del Poder Ejecutivo y a un trabajo serio elaborado por la Comisión de Seguridad Interior. Tal vez, de ese modo, hubiéramos podido englobar y perfeccionar lo que todos pretendemos, que es contar con un adecuado contexto normativo para dar lugar a este tipo de actividades; algo en lo cual el país está en falta.

En 2005, dicha comisión avanzó con el desarrollo de medidas procesales, que acá no figuran; por ejemplo, que la justicia federal sea competente en la materia. ¿Y por qué es importante establecer la competencia de la justicia federal? Algunos podrían sugerir que, por la connotación del delito, la justicia federal puede ser competente. En efecto, en la ley sobre la trata

especificamos la competencia de la justicia federal. Por otra parte, en este dictamen, el Ministerio Público Fiscal asumía la investigación, con amplias facultades, e incluso el propio juez tenía facultades para actuar en ajena jurisdicción.

Por eso, consideramos que era adecuado avanzar en la sanción de una ley especial. Esto no se ha logrado. No obstante, acompañaremos la iniciativa, ya que hay un interés superior: el compromiso del Estado argentino con los organismos internacionales para cubrir este vacío legal.

Ahora bien, hay otras cuestiones que merecen señalarse, como la graduación de la pena.

Hay una pena que oscila entre los 5 y los 20 años y no se hace hincapié en el autor material del hecho en sí. En efecto, uno es parte de una asociación ilícita terrorista por el solo hecho de pertenecer a ella, pero puede tener la misma pena de 5 a 20 años la persona que forma parte de la asociación sin haber, por ejemplo, colocado la bomba. Entonces, me parece que si hubiéramos tomado el trabajo que ya se ha hecho en alguna comisión del Senado o la opinión de algunos especialistas de derecho, hubiésemos avanzado en la tarea de contemplar ampliaciones o duplicaciones del máximo y del mínimo de la pena para el autor concreto del atentado o acto terrorista. Sin embargo, eso no lo tenemos. Sólo contamos con la graduación de la pena de 5 a 20 años para la asociación ilícita terrorista, que puede entrar en concurso real con la pena de un delito común para el supuesto de un homicidio, respecto de quien coloca la bomba.

Creo que estas observaciones son importantes. La ley especial tal vez hubiera dado cumplimiento a todo este espectro que resulta fundamental abordar. No obstante, quiero señalar que el bloque de la Unión Cívica Radical, que ha firmado en disidencia el dictamen respectivo, va a acompañar el proyecto, porque lo prioritario en estas circunstancias es dar cumplimiento a los compromisos contraídos con los organismos financieros internacionales.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani, último orador con relación a este tema.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente: he firmado en disidencia total el dictamen, razón por la cual voy a realizar la fundamentación de mi voto negativo.

Creo que este debate es muy importante, ante un proyecto de ley que tiende a incorporar el artículo 213 ter y quáter en el Código Penal argentino.

La primera pregunta que surge con relación al tratamiento de este proyecto de ley, caracterizado bajo el título de “penalización de asociaciones ilícitas”, es si resulta necesaria la incorporación de un tipo penal, o sea, si es necesaria la respuesta a un vacío existente en nuestra legislación.

Si consultamos con la mayoría de los especialistas en derecho penal —que plantea un concepto filosófico y práctico que ha generado un debate permanente en nuestro país y en los distintos países del mundo en lo que concierne al combate del delito en general y al terrorismo en particular—, comprobaremos que, bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha contra la delincuencia, muchas veces se sacrifican principios y disposiciones de orden constitucional.

Por eso, me parece fundamental incorporar en este debate dos trabajos muy importantes que hacen referencia al proyecto que estamos tratando, cuya inserción en el Diario de Sesiones pido se apruebe oportunamente.

El primero pertenece al Centro de Estudios Legales y Sociales —que fue mencionado por la miembro informante— y formula importantes observaciones al proyecto. Básicamente, plantea la incompatibilidad de los tipos propuestos como artículos 213 ter y quáter en el Código Penal, con desarrollos del derecho internacional, sosteniendo que los tipos penales del proyecto violan principios constitucionales como el de legalidad. Solicito la incorporación en este debate de este trabajo muy detallado del Centro de Estudios Legales y Sociales.

El otro trabajo que pido se incluya en esta sesión —asumo que debiéramos haber consultado a especialistas en derecho penal para el tratamiento de este proyecto— pertenece a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, que también manifiesta una disidencia total con el proyecto en tratamiento.

En una de las consideraciones que efectúa el presidente de esa asociación, se plantea cómo se ha dado el desarrollo internacional en el combate contra este tipo de delitos. Creo que aquí reside el tema central que se ha planteado; es decir, por qué incorporamos hoy un tipo penal

de estas características, a pesar de que éste es un debate que tiene años en el Parlamento argentino.

Un argumento fuerte es el pedido del GAFI, que es el Grupo de Trabajo de Acción Financiera. Se trata de un grupo intergubernamental creado en 1989, del cual forma parte la República Argentina junto a veintiocho países más y a organizaciones internacionales como la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Si bien el GAFI nació en 1989 dedicado a cuestiones vinculadas con el blanqueo de capitales de origen ilícito, a comienzos de 2001 y a instancias del Fondo Monetario Internacional, empezó a elaborar lo que se convertiría en la metodología de evaluación del cumplimiento de normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Este instrumento tiene cuarenta recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y ocho recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo emitida por el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales.

Esto debería enmarcarse —y lo decía la senadora Escudero— en un debate acerca del contexto internacional. Todos quienes estamos aquí sentados rechazamos en términos absolutos el terrorismo. Todos quienes estamos aquí sentados creemos en la paz; es decir, rechazamos la guerra y rechazamos el terrorismo y a los terroristas. Pero, evidentemente, hay un debate acerca de cuál es la metodología que se debe desarrollar a través de las organizaciones internacionales y de los países en el combate de los delitos terroristas.

Vemos que a partir del 11 de septiembre y el terrible atentado terrorista contra las torres, se originó el Acta Patriótica que, en general, intenta desde sus conceptos armonizar normativamente desde el punto de vista internacional y hacer una estandarización. Es decir que todo el debate del terrorismo en los distintos lugares del mundo se está dando todavía hoy, creo que a destiempo y mal.

Por eso, hoy es inconveniente la incorporación de este tipo penal en el Código Penal.

Tenemos dos cuestiones que hoy sí dejan un balance en el mundo. Primero, el descrédito de las organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que ha impulsado —como recién decíamos— este tipo de incorporaciones al plexo normativo de los distintos países del mundo. En segundo lugar,

un concepto de terrorismo desarrollado desde la administración republicana —que es hoy cuestionado en el seno mismo de los Estados Unidos—, como el de la guerra preventiva contra Irak.

Por eso, específicamente respecto del desarrollo concreto de este proyecto de ley, es decir, en la incorporación del tipo penal y en las consideraciones de orden técnico dogmático, quiero compartir totalmente lo planteado por el senador Naidenoff en cuanto a que la incorporación de este tipo penal es absolutamente cuestionable, desde el punto de vista de cuál es el bien jurídico a lesionar o el bien jurídico cuya tutela se procura con esta incorporación.

En este sentido, a través de sus conceptos y desarrollos, Zaffaroni es absolutamente contrario a la incorporación de este tipo penal. Enseña que la creación artificiosa de bienes jurídicos públicos, que no simboliza más que desobediencia a la autoridad, permitió la legitimación de tentativas de delitos de peligro que no importaban peligros reales para el núcleo central de bienes jurídicos, lo que constituye una imputación en violación al presupuesto de “lesividad”. Se trata de la cuestión abstracta que planteaba el senador Naidenoff cuando abordaba este tipo penal. Zaffaroni plantea que el riesgo real es que tales tipos, lejos de producir una sensación de seguridad respecto del valor del derecho, terminen amenazando los espacios de libertad social indispensables para la convivencia democrática. En esto reside nuestro cuestionamiento al artículo 213.

Por otra parte, si bien los argentinos nos caracterizamos por la originalidad, es llamativo que lo que todavía no se ha hecho a nivel internacional —como bien ha señalado la senadora Escudero— pretendamos hacerlo ahora en el Código Penal.

Es decir, el concepto de “terrorismo” es tan esquivo y se ha discutido tanto en el plano internacional, que hasta Brian Jenkins, uno de los expertos más respetados de Estados Unidos en el tema, expresó que terrorismo es “lo que hacen los malos”.

En consecuencia, creo que debemos tener prudencia acerca de la incorporación de estos tipos penales en el Código. Al respecto, considero que es un paso equivocado el que se está dando, que contraría en muchos aspectos a la políti-

ca llevada adelante desde el gobierno nacional, que no es suficiente como fundamentación el pedido de un organismo financiero internacional como el GAFI para que se incorpore este tipo penal al Código Penal y que deberíamos haber desarrollado un debate mucho más extenso y profundo.

Reconozco que este debate no es nuevo, sino que desde hace tiempo que se viene dando, fundamentalmente, en el Senado. Pero existen grandes interrogantes –gigantes– acerca de lo que hoy votaremos en esta Cámara.

Terminaré mi exposición leyendo lo que la Convención Interamericana contra el Terrorismo –que rige desde noviembre de 2003– establece en su artículo 15. Primero: las medidas adoptadas por los Estados parte, de conformidad con esta Convención, se llevarán a cabo con pleno respeto al Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Segundo: nada de lo dispuesto en la presente convención se interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al derecho internacional, en particular, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados. Tercero: a toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente convención, se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías, de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del derecho internacional.

Por supuesto –la historia reciente nos los demuestra–, debemos creer muchísimo más en las Naciones Unidas, en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en los organismos financieros internacionales, que nos piden que incorporemos figuras penales tan ambiguas como la que se pretende incluir en nuestro plexo normativo jurídico en este momento.

Por estas razones, y con el pedido de inserción de los dos opúsculos –el del Centro de Estudios Legales y Sociales y el de la Asociación de Profesores de Derecho Penal–, reitero mi voto negativo al proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Está cerrada la lista de oradores.

La Presidencia solicita a la señora miembro informante que indique cuáles son las modificaciones que serán aceptadas por la comisión; de ese modo, podría votarse en general y en particular en una sola votación.

Sra. Escudero. – ¿Me permite hacer uso de la palabra?

Sr. Presidente (López Arias). – La miembro informante es la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Cedo la palabra a la señora senadora Escudero y luego hago el cierre.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero contestar algunas de las observaciones que se hicieron al proyecto en consideración.

En primer lugar, a lo manifestado por el señor senador Petcoff Naidenoff. Efectivamente, en el seno de la comisión, habíamos analizado la posibilidad de avanzar en una ley especial. Sin embargo, la sanción del día de la fecha no es incompatible con el abordaje posterior, en una nueva norma, de las herramientas procesales o de los organismos nacionales que tendrán a su cargo el tratamiento de este tema. Además, también queda pendiente la discusión sobre la competencia federal en el caso de delitos de terrorismo.

Reitero que lo no se aborde hoy no significa que no se siga trabajando, para tratarlo posteriormente.

No se incorpora al autor del hecho terrorista porque todos los actos terroristas están ya, de alguna forma, tipificados en nuestro Código Penal. Entonces, por el concurso de delitos, quien puso una bomba tendrá la sanción que corresponde, por ser parte de la asociación ilícita terrorista y también por el artículo correspondiente al atentado con bombas y así sucesivamente.

Hemos analizado profundamente las observaciones realizadas por el CELS y, realmente, no es correcto lo que se dice en el sentido de que se trate de una figura abierta. Todo lo contrario.

Tampoco nos hemos apartado de las convenciones internacionales ni del respeto por los derechos humanos.

El propio relator especial para los derechos humanos citado por el CELS ha manifestado que, a nivel nacional, la especificidad de los delitos de terrorismo viene dada por la presencia de tres condiciones acumulativas: los medios utilizados—violencia grave—, la intención—provocar el miedo—y la finalidad o el objetivo político-ideológico subyacente. O sea que en el proyecto están absolutamente tomadas en cuenta todas y cada una de las observaciones y las recomendaciones que se hacen desde las Naciones Unidas.

El tipo penal que se ha elegido, el de la asociación ilícita terrorista, existe también en el derecho comparado. Es el elegido por los códigos alemán, francés, español e italiano, que han sido también fuente de nuestro propio código. De modo que es absolutamente compatible con nuestra legislación interna.

Uno de los principales problemas que teníamos en el abordaje de este tema cuando decidimos incorporar a nuestro Código Penal cada una de las figuras que describen las convenciones internacionales, era que las convenciones están escritas en un lenguaje típico del *common law*, muy diferente de nuestro sistema continental sobre derechos y códigos cerrados.

De modo que la opción que se elige es la del código penal alemán, que es lo más similar que tenemos en nuestro derecho.

Finalmente, quiero hacer referencia a que no se legisla a gusto del GAFI. En primer lugar, la Argentina ha elegido ser miembro del GAFI. En este mundo posmoderno, donde la opción es el nacionalismo o la integración, la Argentina ha optado por la integración y por ser miembro de organismos internacionales. Y dentro de las opciones de integración, la armonización legislativa es una de las opciones, porque es lo básico para la cooperación internacional.

Se legisla, fundamentalmente, porque los compromisos internacionales asumidos están en la ratificación de la Convención contra la Financiación del Terrorismo, la Convención de las Naciones Unidas y la resolución 1.373, que ha sido también aprobada por decreto del Poder Ejecutivo nacional. La recomendación del GAFI coincide con estas normas de las Naciones Unidas y apunta solamente a la financiación del terrorismo. La tipificación y la elección de la asociación ilícita terrorista como figura no es una imposición del GAFI. Lo que ese órgano le

pide a la Argentina es el control del financiamiento del terrorismo y que las instituciones financieras argentinas estén obligadas a reportar todas aquellas operaciones que aparezcan sospechosas de ir a financiar al terrorismo o a las organizaciones terroristas.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora Ibarra.

Sra. Ibarra. — Señor presidente: para cerrar este debate, voy a contestar algunas de las observaciones que se hicieron al dictamen de las tres comisiones que intervinieron en el tratamiento de este proyecto.

Cuando comencé a hablar, dije que la Argentina había fijado una política de Estado en materia de lucha contra el terrorismo y contra su financiación. Dije que había un posicionamiento respecto de esto: comprometernos ineludiblemente en la lucha contra el terrorismo dentro del marco del respeto por los derechos humanos, tal como lo planteó el presidente en las innumerables ocasiones en que se hizo cargo del tema ante la comunidad internacional y en nuestro país, atendiendo al derecho humanitario y haciéndolo en el consenso de la comunidad internacional organizada.

Estamos hablando de actos ilícitos y del financiamiento de actos ilícitos vinculados con el terrorismo internacional. O sea que esto sólo podemos abordarlo desde la comunidad internacional organizada, armonizando normativas y en el marco de acuerdos internacionales para poder luchar contra este tipo de actividad.

Yo quiero plantear que en la Argentina tuvimos dos graves actos terroristas de un enorme impacto y sabemos de lo que estamos hablando. A su vez, somos firmantes de todos los tratados y pactos internacionales en defensa de los derechos humanos. En este momento, somos líderes en el mundo en materia de derechos humanos, porque hemos vivido la represión, la tortura, la persecución, la criminalización de la protesta social y sabemos lo que eso significa para un pueblo y para las distintas generaciones. De ahí el compromiso con esta lucha contra el terrorismo, que se cobra vidas y que provoca terror en poblaciones enteras.

Quiero leer el artículo 213 ter, para entender a qué nos referimos hablando, dado que hablamos de cuestiones humanitarias, de resguardar temas que hacen a las libertades y demás. Voy a leer el

artículo que estamos incorporando. Dice así: "Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea mediante la comisión de delitos terrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características—esta pluralidad indica que el texto es acumulativo—: a) tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) estar organizada en redes operativas internacionales; c) disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas".

Quiero decir que hemos dejado una cláusula cerrada, limitante y precisa. donde nadie, absolutamente nadie puede, con algún grado de apoyo en la realidad, sospechar siquiera que se está intentando criminalizar la protesta social o que se están reduciendo derechos humanos. Lejos de ello, hemos vivido dos atentados terroristas en este país, conocemos lo que pasa en el mundo, sabemos lo que pasó en Madrid y en Estados Unidos y estamos dando respuesta, en el marco de la comunidad internacional, a hechos de una extrema gravedad que exigen respuestas coordinadas en el ámbito internacional.

También quiero decir que la asociación ilícita no sólo es un delito que existe en nuestro Código Penal. Es cierto que se trata de una figura controvertida, pero no constitucionalmente.

Aclaremoslo: no está controvertida constitucionalmente; la Corte Suprema de Justicia jamás ha dicho que es inconstitucional. A unos le gustará menos y a otros más.

La verdad es que estamos ante hechos que presentan una enorme dificultad, porque se trata de una problemática de esta época a la que tenemos que dar respuesta normativa con códigos penales antiguos. Por lo tanto, debemos buscar en cómo tipificamos esta problemática armonizando el derecho internacional con el interno.

En este sentido, es cierto que nuestra legislación contempla la figura de la asociación ilícita; incluso fue el propio radicalismo quien la recogió, cuando en la Ley de Defensa del Orden Democrático incorporó el artículo 210 bis

—referido a la asociación ilícita calificada—, para defender el orden democrático y reprimir a aquellos que atentaran contra el orden constitucional.

Quiero decir también que, tal vez, se deslizó un error cuando se mencionó que el actual Poder Ejecutivo presentó un proyecto en el que parecía querer dejar de lado la figura de la asociación ilícita. El proyecto que mencionó el señor senador Petcoff Naidenoff—tal como lo dice la fundamentación de la iniciativa— está tratando de armonizar la tradición legal de la figura especial sancionada en una norma que modificaba la ley penal tributaria con el artículo 210 del Código Penal. Y específicamente así se propone.

No obstante ello, más allá de que guste más o menos, aclaro que de ninguna manera el delito de mero peligro es inconstitucional. Actualmente tenemos contemplado en el Código Penal el delito de envenenamiento de aguas, es decir que el solo hecho de envenenar agua encaja en la conducta típica exigida por la figura penal. Asimismo, también tenemos a las figuras de adulteración de medicamentos, violación de secretos, asociación ilícita; y si seguimos recorriendo el Código y las leyes especiales veremos que contamos con innumerables delitos de mero peligro.

Es cierto que la doctrina discute y pone en tela de juicio este tema —y se están buscando alternativas—, pero lo cierto es que en el ámbito internacional, en el derecho comparado —como dije anteriormente: Alemania, Italia, España y en menor medida Francia— han encontrado en la asociación ilícita el camino para dar respuesta a esta problemática. Porque lo cierto es que cuando queramos penar el financiamiento de la actividad terrorista vamos a tener que decir qué y cómo se incurre en el acto terrorista.

Aclaro que los compañeros del CELS, a quienes hemos recibido y con quienes siempre discutimos y trabajamos codo a codo en la defensa de todo aquello que se vincula a la vigencia plena de los derechos humanos, han presentado algunas observaciones sin ninguna propuesta positiva en la materia. Esto incluso lo hablé con la persona que vino en representación del CELS y me dijo que era cierto, que no era fácil plantearlo.

Ellos critican el tipo penal de mero peligro, pero no buscan una salida para que podamos

penalizar el financiamiento del terrorismo, lo que no sólo estamos obligados a hacer por razones de índole internacional sino también para defensa de los congéneres de nuestro propio país. Es decir que también necesitamos del consenso internacional para luchar contra el financiamiento del terrorismo.

La ley especial que la gente del CELS menciona no salda el tema vinculado a si van a hacer un listado de delitos considerados terroristas o si van a definir de algún modo la actividad terrorista.

Pero lo cierto es que tenemos que buscar alguna manera de resolver la cuestión.

En este sentido, nosotros hemos buscado un modo que respeta los derechos humanos —por eso la iniciativa tiene este nivel de consenso—, cumpliendo con las organizaciones internacionales y dando una herramienta eficaz para poder penalizar e investigar el financiamiento de las actividades terroristas. Y ello se incorpora dentro de la lógica estructural del Código Penal.

Finalmente quiero plantear que esto no es a pedido del GAFI. Si algo no se puede decir a esta altura es precisamente ello. El Fondo Monetario Internacional nos ha pedido leyes y en este Congreso se han sancionado normas a pedido de ese organismo, pero no ha sido precisamente en esta época ni es en este momento de la Argentina cuando levantan el teléfono desde los organismos internacionales para pedir que sancionemos leyes, porque si no corre peligro nuestra vigencia en la comunidad internacional.

Lo cierto es que somos parte del GAFI y en virtud de la Convención Internacional de Represión del Financiamiento contra el Terrorismo —con la cual estamos consustanciados— tenemos la responsabilidad de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico una figura penal autónoma que penalice el financiamiento del terrorismo.

El señor senador Giustiniani mencionó a la ONU. Y, en ese sentido, quiero decir que precisamente tenemos el informe de la División de Asuntos de Tratados Internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas, que específicamente establece que: “A la luz de las consideraciones que anteceden, cabe concluir que el proyecto bajo análisis resultaría, en términos generales, conforme con el Convenio Internacional de Represión del Financiamiento contra el Terrorismo, de 1999, y con la Resolución 1.373, de 2001, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El proyecto

de ley, adaptando la terminología y la sistemática legislativa a la tradición penal argentina, incriminaría las conductas previstas por los referidos instrumentos internacionales”.

O sea que la propia Naciones Unidas ha acompañado en su dictamen este proyecto de ley, manifestando que está en el marco del consenso internacional y del amplio respeto de todos los pactos vigentes sobre derechos humanos, tal como nos comprende a los argentinos.

Dicho esto, y como había adelantado la señora senadora Escudero, la única modificación que vamos a hacer es debido a un error material. Así, en el artículo 8º, inciso 2), se suprimen la expresión “del Código Penal”, que son tres palabras que se incorporaron y que no debieron estar.

El resto del texto debe votarse conforme el dictamen de las tres comisiones.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se practique una sola votación en general y en particular.

Sr. Presidente (López Arias). — Sí, con la modificación aceptada por la comisión.

Sr. Rossi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (López Arias). — El debate está agotado, pero tiene la palabra el senador Rossi.

Sr. Rossi. — Señor presidente: simplemente para referenciar la intención de mi voto. Voy a votar afirmativamente el proyecto en tratamiento. Y a mérito de que ya se votó la inserción, voy a insertar mi posición al respecto.

Sr. Presidente (López Arias). — Perfecto. Las inserciones fueron votadas cuando se cerró la lista de oradores, o sea que están autorizadas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en general y en particular en una sola votación, con la modificación aceptada por la Comisión.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 51 votos por la afirmativa y 1 negativo; ninguna abstención.

—El resultado de la votación surge del Acta N° ...¹

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.¹

Si hay asentimiento, se solicita al cuerpo que autorice a la Presidencia a remitir inmediatamente este proyecto a la Cámara de Diputados, donde lo están esperando.

–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Así se hará.

15

DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA Y EXPROPIACION DE DIVERSOS INMUEBLES EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación diversos inmuebles ubicados en la ciudad de Buenos Aires. (Orden del Día N° 305.)

En consideración en general.

Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: el dictamen cuyo tratamiento estamos abordando tiene por objeto el mensaje del Poder Ejecutivo remitido el 23 de abril de 2007 y que constituye el punto final a una serie de hechos que tomaron estado público respecto de la situación en materia concursal y de quiebra, aunque también –y esto me corresponde decirlo a mí y no al Poder Ejecutivo– de vaciamiento que sufrió el Hospital Francés.

Creo que por sus antecedentes y tradición, hartamente conocidos por todos los señores senadores y senadoras, por la importancia de esta institución y también por la necesidad de preservación de las fuentes de trabajo –que es otro de los temas por los que se discutió y abordó esta problemática–, ante la situación planteada el año pasado, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de intervenir en la cuestión, es decir, de tomar cartas en el asunto. Finalmente, se produce el envío al Parlamento de este proyecto

de ley, cuyo objeto es declarar de utilidad pública y expropiar todos los inmuebles que conforman el patrimonio del Hospital Francés –para decirlo con mayor precisión: de la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia–, a fin de que pasen a prestar servicios en la órbita del PAMI.

Durante el desarrollo de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tuvo lugar exactamente hace dos semanas –cuya versión taquigráfica pido que se incorpore al presente debate, a efectos de duplicar nuevamente las discusiones que allí tuvieron lugar–, quedó muy en claro que estamos ante un proyecto de ley de expropiación. Como todos sabemos, el mecanismo de la expropiación compete al Poder Ejecutivo, mientras que al Parlamento le corresponde declarar la utilidad pública, que es lo que habilita constitucionalmente a la expropiación para luego, a través de un mecanismo ya planteado de manera previa, proceder a la tasación del inmueble y, así, culminar con el proceso.

En esa reunión de comisión la Unión Cívica Radical presentó algunas propuestas. Pero como han firmado en disidencia, seguro que alguno de los miembros del bloque informará acerca de su posición.

No obstante, lo cierto es que durante todo el desarrollo de la reunión quedó muy en claro no sólo que estamos ante un proyecto de ley de expropiación, con un mecanismo muy claro, establecido constitucional y legalmente, sino también que, en casos como el que estamos abordando, ya sea por la negativa o la positiva, el Parlamento siempre se ha limitado a declarar la utilidad pública, que es la función que le compete en este tipo de mecanismos.

Acá se había solicitado introducir una cuestión, que tiene que ver con los salarios adeudados a los trabajadores. En este sentido, si bien la señora senadora Negre de Alonso no es miembro de la comisión, voy a permitir que ella –que también intervino en la reunión de comisión y que, además, es la titular de la cátedra de concursos y quiebras de la Universidad Austral–, sea quien conteste las objeciones que formule el miembro informante de la minoría, de la misma forma en que lo hizo durante el desarrollo de la reunión de Comisión, dado que fue precisamente este Parlamento el que introdujo modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras

¹ Ver el Apéndice.

III

ACTAS DE VOTACIONES ELECTRONICAS



Senado de la Nación

Votación Nominal

125° Periodo Legislativo - Ordinario - 7ª Sesión

EN TANTO EN EL PROYECTO DE LEY POR LA CUAL SE MODIFICAN VIGILAS AL CÓDIGO PENAL Y SE MODIFICAN ARTÍCULOS DEL ALFARO SOBRE PENALIZACIÓN DE ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y SU FINANCIACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 366
(02-449/06)

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Artículo 2º con todo 2 con modificaciones.

Año 2007	Fecha: 6 - 06 - 07	Hora: 16:35
Tipo de Quorum	Más de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: más de la mitad de los presentes
Presidente:	LOPEZ ARIAS, Horacio Eduardo	Desempate: NO
		Miembros del Cuerpo: 73

Presentes Identificados	52	Votos afirmativos	51
Presentes No Identificados	-	Votos Negativos	1
Total Presentes	52	Abstenciones	-
Ausentes	20		
Votos Afirmativos Necesarios	27	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFFIRMATIVA



Senado de la Nación
Comodoro en Jefe del Cuerpo
Comodoro en Jefe del Cuerpo

*Semiothisa* *laevigata*

Formación Nominal

128° Peroxide Laserzylinder - Chondroitin - 7° Bismut

[illegible]

ORDER OF THE DAY
1992-1-19/993

4473633 000 554000000 4 000 000 000 000

[illegible]

4028 N^o: 2

தமிழ்நாடு: ௧ - ௧௦௫ ௩௮௩

445,522,25

Tipo de Contrato

www.dharmaparam.org

Moyness si equosito:

even the shortest of the
seasons

Dimension del Grupo: 72

Pseudoxe:

2-05092, as 10.5. 2000-05-10 10:00:00

November 2012

[illegible]

IV
INSERCIONES

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI**Tema: Penalización de asociaciones ilícitas
terroristas y su financiamiento****(Orden del Día N° 306)**

Rosario, 22 de mayo de 2007.

A la señora presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación.

Me dirijo a usted a efectos de agradecer la invitación cursada para participar en la reunión conjunta de comisiones a celebrarse el próximo martes 22 de mayo, citada a efectos de considerar el proyecto de ley sobre penalización de asociaciones ilícitas terroristas y su financiación.

En razón de la imposibilidad de asistir personalmente a dicha reunión, me permito acompañar un informe en relación al mencionado proyecto, con la finalidad de contribuir a su consideración y discusión.

En ese sentido, intentaré brevemente formular algunas reflexiones (de contenido) en los dos planos de análisis obligado: el político criminal y el dogmático constitucional, así como una referencia a ciertos aspectos de forma que, estimo, no pueden desvincularse de las primeras.

Cabe señalar que, en procura del fortalecimiento y profundización del estado de derecho, tanto una como otra dimensión se encuentran condicionadas por el respeto a principios y garantías constitucionales.

Desde esa perspectiva, la discusión en torno a qué, cómo y cuánto derivar a la intervención penal, así como la técnica de configuración normativa, no pueden sustraerse a esos principios cuya fuente de inspiración histórico-ideológica se vincula a la necesidad de limitar el poder a favor de los derechos fundamentales de las personas.

Por ello, respetuosamente se ha sostenido que la misión excluyente de un legislador a la hora de producir normas penales es la de desarrollar la Constitución Nacional y la de los tratados internacionales de derechos humanos.

I. Consideraciones de orden político criminal

1. Determinar qué, cómo y cuánto criminalizar como delito (*dentro los límites constitucionales*) supone definir cuáles son los problemas y conflictos intolerables, acordar qué grado de intervención debe tener el Estado, formular un análisis de costos-beneficios de esta intervención y conocer la capacidad del sistema penal (en especial el judicial) para asumir el nuevo problema.

Siendo así, la urgencia no se presenta como el criterio más conveniente para dar tratamiento e impulsar la sanción de un proyecto como el comentado que, al igual que cualquier otro destinado a habilitar más intervención penal, exige —cuanto menos— un espacio necesario de discusión y debate.

En el caso, la premura en la consideración del proyecto sobre asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo, lejos de una discusión sobre sus fundamentos y necesidad, aparece lamentablemente más vinculada a pretensiones de organismos internacionales que —como el FMI¹— no gozan en la actualidad, y especialmente en nuestra región, de reconocimiento o consenso. Menos aún para definir la agenda del tratamiento político criminal en nuestro país.

2. Esta objeción pone en evidencia un vicio de inicio que deslegitima una iniciativa donde los intereses de organismos externos son priorizados a la necesidad del debate y discusión y, antes de ello, a la discusión sobre las necesidades político criminales, así como a la relativa a los límites de los compromisos internacionales asumidos y la pertinencia —a esos fines— de una propuesta como la impulsada.

La afirmación tiene además respaldo en el interés del GAFI² que nace dedicado prácticamente a cues-

¹ A comienzo de 2001, el FMI, conjuntamente con otras organizaciones, empezó a elaborar lo que se convertiría en la metodología de evaluación del cumplimiento de normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se trata de un instrumento que sirve para evaluar la aplicación de las 40 recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y las 8 recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo emitidas por el grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI). A través de la división de asuntos especiales de supervisión financiera del departamento de sistemas monetarios y financieros y la unidad ald/1ft del departamento jurídico, el FMI evalúa el marco adoptado por cada país para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

² Los países miembros del FMI y otras jurisdicciones tienen varias opciones para conformar sus legislaciones a las normas y pautas establecidas por la comunidad internacional en lo relativo a la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Las fuentes abarcan desde normas internacionales jurídicamente vinculantes, como las consagradas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en acuerdos internacionales como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, hasta normas no vinculantes establecidas por grupos de países que actúan mancomunadamente, como las 8 Recomendaciones Especiales sobre la Financiación del Terrorismo expedidas por el GAFI.

tiones vinculadas al blanqueo de capitales de origen ilícito y, como consecuencia del impacto de los hechos criminales ocurridos el 11-S, amplía su campo de actuación a la lucha contra la financiación del terrorismo.

La influencia del organismo en la elaboración del proyecto es determinante, tanto que se ha objetado, precisamente, que en su formulación sólo se han tenido en cuenta las recomendaciones de algunos organismos internacionales –como el GAFI– y no la de otros órganos especializados en la materia.³

Vale señalar que dicha organización internacional no tiene mayor entidad que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,⁴ las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos. Pero aun suponiendo, por vía de hipótesis, la necesidad de implementar todas y cada una de las recomendaciones (en el caso, las recomendaciones especiales para combatir la financiación del terrorismo), existe un compromiso y obligación superior que deriva de la necesidad de respetar los derechos humanos.⁵

3. En esa perspectiva, resulta poco explicable la premura por el tratamiento de un objetable proyecto de ley vinculado a asociaciones ilícitas *terroristas* y a la penalización del *financiamiento* en un contexto normativo que luego de sucesivas y espasmódicas reformas penales ha terminado privilegiando la propiedad sobre la vida humana (entre otros tantos supuestos disparatados, en la ley penal vigente la escala penal conminada para un robo calificado agravado por el uso de armas y re-agravado por la intervención de un menor, aún cuando

³ Comentarios y observaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al proyecto de ley P.E. 449/06, 22 de mayo de 2007.

⁴ Precisamente, la CIDH, en el “Informe sobre terrorismo y Derechos Humanos” (documento OEA/Ser.L/V/II.116, del 22/10/2002), advirtió sobre el riesgo que pueden implicar las medidas para combatir el terrorismo, para la garantía de los derechos de los trabajadores migratorios, las personas que buscan asilo, los refugiados y no nacionales. Asimismo reclamó la necesidad de preservar el derecho a la vida a la libertad y seguridad personales, a un trato humano, al debido proceso y a un juicio justo, y a la libertad de expresión en la represión de actos de terrorismo.

⁵ En las “Recomendaciones para la protección de los derechos humanos por parte de los Estados Miembros de la OEA en la lucha contra el terrorismo” (documento OEA/Ser.G, CPdoc 4.117/06 del 09/05/2006), la CIDH sostuvo que la lucha contra el terrorismo y el respeto a los derechos humanos va l derecho internacional humanitario es responsabilidad complementaria y no contradictoria de los Estados Miembros de la OEA.

no produzca lesión alguna, es SUPERIOR a la escala penal de un homicidio doloso) u omitiendo toda configuración de los delitos de genocidio, lesa humanidad y desaparición forzada de personas.

Acaso en la agenda político criminal esta última cuestión está por debajo de la materia del proyecto en discusión?

4. De otra parte, cabe señalar que, en general, el proceso de armonización y estandarización normativa internacional en materia de *lucha contra el terrorismo* no es, precisamente, un modelo exento de discusión y cuestionamientos.

Los crímenes del 11-S han proyectado, tal como fue anticipado por parte importante de nuestra propia doctrina penal, superlativas consecuencias sobre las prácticas políticas e incluso sobre los sistemas jurídicos, potenciando las ya conocidas tensiones estructurales del sistema penal, sobredimensionando además de la eficiencia el valor seguridad y, como correlato, la afectación de libertades y garantías.

Sobre la base de una jerarquización ideológica de la seguridad, se ha entronizado una especie de policía del pensamiento y hemos asistido a la pretensión de cancelar garantías constitucionales y de instalar tribunales militares de excepción donde una superpotencia tenga jurisdicción mundial sobre cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. En nombre de la lucha en contra del terrorismo se han violado normas básicas del derecho penal y procesal penal.

La detención de personas de origen de Afganistán después del 11 de septiembre y los secuestros en la base de Guantánamo –una suerte de “limbo jurídico”–, sumados a la propuesta de institucionalización de las llamadas “técnicas alternativa de interrogación” (un eufemismo de la tortura), demuestra hasta qué punto se puede llegar en lo que se ha dado en llamar el nuevo derecho penal.

Precisamente, la armonización internacional en la materia no es más que la pretensión de estandarizar el Acta Patriótica, en versión regional, y cabe cuanto menos reflexionar profundamente hasta qué punto, las facultades consagradas en el acta patriótica para intervenir cuentas bancarias no queda emparentada con las concedidas en el proyecto a la unidad de información financiera (UIF).

5. La política criminal de un Estado democrático exige un fuerte compromiso constitucional, supone una gran prudencia y responsabilidad funcional. Ni el miedo, ni la violencia, ni las necesidades electorales, ni las presiones transnacionales o internacionales pueden ser reguladores a partir de los cuales diseñar la intervención penal. En este último aspecto, ayudan en mucho las experiencias y, entre tantas, vale citar las sucesivas reformas legislativas en materia de drogas. Nunca se ha *gastado* tanto, ni sacrificado tan groseramente las normas constitucionales: nunca el fracaso ha sido tan grande. Una

estructura normativa deforme e irracional, de casi imposible sistematización, un marcado desprecio por los principios que condicionan la producción legislativa y, como si fuera poco, la incorporación de instrumentos premodernos ajenos a la tradición jurídica argentina (arrepentidos, delatores, etc.). Ya sabemos cuál fue el debut de estos engendros y cuál el resultado en uno de los crímenes más graves de nuestra historia.

Se han sacrificado principios, se ha degradado éticamente el Estado de derecho (al legislarse la posibilidad de que el Estado se asocie al delito para combatir el delito) y el fracaso operativo ha sido superlativo. Lejos de las motivaciones manifiestas, sólo se ha conseguido potenciar uno de los más graves defectos estructurales de nuestros sistemas penales: la corrupción.

La lógica, a partir del pretexto de un problema grave y complejo (el narcotráfico, el terrorismo), sigue siendo la misma. El riesgo, consecuentemente, será el mismo: bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha contra la delincuencia (terrorismo) se sacrifican principios y disposiciones de jerarquía constitucional.

La paradoja es que, finalmente, hasta aquellos que adscriben (siempre pensando en los "otros") a la regla de que el fin justifica los medios, deben resignarse y admitir que el fin perseguido (cuanto menos el declamado) nada tiene que ver con los medios elegidos. El resultado es conocido: ni respeto a los principios, ni eficacia en la reducción o control del crimen.

De allí que la prudencia sea indispensable a la hora de discutir la incorporación de normativas como las propuestas. Es que no sólo carecerán de impacto real en el problema sino que, más grave aún, constituirán la fuente de un debilitamiento institucional progresivo porque, como se ha dicho tantas veces, cuando un camino se abre pronto puede convertirse en una amplia avenida.

6. Suele sostenerse que hay problemas graves y excepcionales que demandan una respuesta grave y excepcional. En ese camino, la emergencia siempre justifica la excepción y la excepción se justifica siempre en la necesidad de defender el estado de derecho y la democracia. Una paradoja que, en la filosofía política, ha señalado magistralmente Giorgio Agamben⁶.

Una paradoja según la cuál al estado de derecho se lo defiende mediante su negación. Sin embargo, como ha defendido Luigi Ferrajoli⁷, la razón jurídica del estado de derecho no admite excepción a las reglas más que como hecho antijurídico, dado que las reglas no pueden ser doblegadas cada vez que con-

viene y en la jurisdicción penal el fin nunca justifica los medios, en tanto éstos, es decir, las reglas y las formas, son las garantías de verdad y de libertad y, como tal, tienen valor para los momentos difíciles más que para los fáciles.

La referencia vale, en tanto el derecho es la negación, precisamente, de la guerra y las razones político criminales, en el caso, sólo pueden explicarse (no justificarse) a partir de las exigencias externas en orden a la configuración de un verdadero derecho de guerra (más allá de la *contradictio in terminis*).

Las características de la normativa proyectada: (a) apelación a un bien jurídico de contornos difusos, (b) recurso a una figura asociativa y con ello a una anticipación punitiva, (c) reivindicación del peligro abstracto y con ello de la punición de conductas alejadas de la lesión a bienes jurídicos, (d) formulación de un tipo penal amplio, con referencias vagas y difusas, (e) escala penal frontalista y desproporcionada, (f) delegación de dudosas facultades de intervención a una agencia administrativa, forman casualmente parte del catálogo de elementos que dan entidad al llamado "derecho penal del enemigo", ya en la conceptualización de Günther Jakobs, ya en la de Francisco Muñoz Conde, por citar dos opuestos de la doctrina comparada.

No puede omitirse, además, que la intención de procurar una categoría (tal, por ejemplo, la de criminalidad compleja) supone claramente asumir un concepto político, destinado a cumplir una función político criminal que es legislar sobre modos de persecución de carácter excepcional. El problema es que esa funcionalidad política es inconstitucional: se pretende penalizar actos preparatorios, ampliar los límites típicos a través de figuras abiertas al modo de cláusulas generales, anticipar la punición al peligro de peligro, aumentar las facultades de las agencias administrativas y ejecutivas, justificar la delación, los agentes encubiertos autorizados a delinquir, el aumento de penas por su carácter simbólico, etc.. Desde esta perspectiva funcional se justifica todo, es decir, se procura apelar a una categoría de justificación de cualquier violación constitucional y, además, se explicita que esa sería, justamente, la ventaja político criminal.

Sin embargo, no hay compromiso internacional, ni convención, ni tratado que puedan neutralizar el compromiso legislativo serio y responsable y la obligación de respeto a las normas de jerarquía constitucional.

II. Consideraciones de orden técnico-dogmáticas

1. Las cuestiones involucradas en la normativa propuesta.

El proyecto postula la incorporación en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal (Orden Público) del capítulo VI denominado "Asociaciones

⁶ Estado de excepción, AH Editora, 2004.

⁷ Derecho y razón, ED. Trotta, 1995, Págs. 321 y ss.

ilícitas terroristas y financiación del terrorismo” y ubica dentro de este capítulo dos artículos que tipifican sucesivamente la asociación ilícita terrorista (art. 213 ter) y la financiación del terrorismo como delito autónomo (art. 213 quater).

Asimismo introduce modificaciones a la ley 25.246, sustituyendo los artículos 6, 13, inc. 2, 19 y 23, inc. 1.

Por razones de límite, formularé algunas consideraciones respecto a la creación de las dos figuras delictivas, en tanto los restantes artículos del proyecto (art. 4 al 7 inclusive) introducen modificaciones tendientes a consolidar la vinculación del fenómeno del terrorismo con el de lavado de activos de origen ilícito (a pesar de las notorias y comprobadas diferencias existentes entre ambos problemas) y, consecuentemente, a habilitar la intervención del organismo ejecutivo creado por la ley 25.246 (Unidad de información financiera) con amplias y cuestionables facultades de intervención, como agente de prevención del delito de financiación del terrorismo y del delito de lavado de activos que tenga como delito precedente el de financiación de terrorismo.

2. El bien jurídico.

El proyecto propone la incorporación de los dos tipos penales dentro del título de los delitos contra el orden público. Sin embargo, teniendo en cuenta la función limitativa del concepto de bien jurídico y su estrecha y necesaria relación con el principio de lesividad, la referencia al orden público se asemeja más a una solución de compromiso que a la individualización de un interés valioso posible de lesión por el pretendido comportamiento objeto de prohibición.

Es que la ubicación de las dos figuras y, en especial la de financiación del terrorismo, como delito contra el orden público no puede ocultar el sentido latente de un diseño normativo simbólico que parece elevar a la categoría de bien jurídico a los intereses de la propia organización internacional (el GAFI).

Han dicho, entre nosotros, Zaffaroni, Alagia, Slokar, que la creación artificiosa de bienes jurídicos públicos que no simbolizan más que desobediencia a la autoridad, permitió la legitimación de tentativas de delitos de peligro que no importan peligros reales para el núcleo central de bienes jurídicos, lo que constituye una imputación en violación al presupuesto de lesividad.

El riesgo real es que tales tipos lejos de producir una sensación de seguridad en el valor del derecho, terminan amenazando los espacios de libertad social indispensables para la convivencia democrática.

Este riesgo se potencia superlativamente si se repara, como se relacionará infra, en el diseño normativo concreto que se verifica mediante el recurso a

una tipificación abierta, vaga y difusa y como figuras de pura actividad y peligro abstracto.

Con acierto, señala el informe del CELS⁸ que un ejemplo de las inconvenientes consecuencias derivadas de este tipo de normativa, ha sido el procesamiento de dirigentes mapuches en Chile bajo la ley antiterrorista, por cargo de incendios de bosques. De este modo, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo se ha posibilitado un instrumento normativo de tal amplitud que, lejos de afectar al terrorismo, resulta políticamente funcional a una pretendida (e ilegítima) *solución* del llamado “conflicto mapuche”, asignando relevancia típica terrorista a comportamientos absolutamente extraños a tal carácter⁹.

3. Configuración normativa típica.

El proyecto apela a una técnica de configuración normativa refinada con límites constitucionales formales y materiales.

Y ello no es más que la inevitable consecuencia derivada de la imposibilidad de establecer un concepto o definición de terrorismo y, consecuentemente, de delito de terrorismo. No es ajeno a ello la inconveniencia y los peligros de tal pretensión frente a una referencia tan confusa y nebulosa.

Vale aclarar que en los fundamentos del proyecto se sostiene que para no dañar la lógica estructural que organiza al Código Penal Argentino, se ha procurado una figura asociativa calificada (art. 213 ter. “asociación ilícita terrorista”), que *da precisión al concepto de terrorismo* y se ha incriminado la financiación del terrorismo tanto para el caso de quien financia una asociación ilícita terrorista, cuanto para el supuesto de quien financia a un integrante de ésta que realice uno de los delitos que constituyen su objeto.

En primer término, la lógica estructural del Código Penal Argentino ya ha sido dañada superlativamente luego de la incontinencia legislativa que ha dado lugar (desde hace años) a un fuerte proceso de descodificación y a las sucesivas reformas que han desarticulado toda la parte general, roto el principio de proporcionalidad de las penas e infraccionado el catálogo delictivo y las escalas penales, así como las agravantes genéricas y específicas.

En segundo término, si la finalidad es dar precisión al concepto de terrorismo, fácil es advertir que con el texto propuesto no se ha logrado. Por otra parte, cabe reparar en el peligro que una tal pretensión supone.

⁸ Comentarios y observaciones del CELS, pág. 9.

⁹ La CIDH ya ha declarado admisible una petición para determinar la responsabilidad del estado de Chile (informe nro. 89/06, petición 619-03, declarada admisible el 21/10/2006).

En tercer término, y como veremos infra, la regulación del delito de financiación del terrorismo en la forma propuesta, no hace más que sumar daño a la ya deteriorada lógica estructural (perdida) del Código Penal.

Por su parte, y volviendo al artículo 213 ter proyectado, la figura se presenta como una suerte de cuadratura del círculo si se repara que, desde el punto de vista internacional, el terrorismo no está definido, dado que los Estados rehuyen a su conceptualización. Por ello, debe rechazarse todo intento de definición¹⁰, entre ellos, el que procura el artículo comentado que, finalmente, termina intentando dar cuenta de una asociación ilícita de marcada vaguedad y amplitud a pesar, incluso, del recurso a ambiguas herramientas normativas que se procuran como instrumento de clausura de la interpretación pero que suman a la caracterización de la figura como un tipo abierto que se perfila como herramienta potencial para la criminalización generalizada.

Se ha dicho acertadamente que un tipo penal no es un instrumento para que el poder sorprenda a los ciudadanos con su arbitrariedad.

Es que, como lo ha señalado el CELS, la formulación ni siquiera se ajusta a los estándares que las Naciones Unidas han comenzado a delinear en el intento por identificar algunos actos pasibles de ser calificados como "actos terroristas". Así, y como ilustra el referido informe, tanto el Consejo de Seguridad como el Relator Especial de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades en la lucha contra el terrorismo, han elaborado algunos rasgos esenciales que, como mínimo, deben estar presentes en la tipificación.

En este sentido, la resolución 1.556 del 8 de octubre de 2004 del Consejo de Seguridad, exige que se trate de actos cometidos con intención de causar muerte, lesiones corporales graves o tomar rehenes; cometidos por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar con la intención de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; y que constituyan delitos definidos en las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprometidos en su ámbito.

Este último requisito se ha fijado como referencia obligada, procurando que sólo se prohíban aquellos delitos comprendidos en el ámbito de las convenciones y protocolos internacionales y que,

además, se cometan con la intención de causar muertes o lesiones graves o tomar rehenes y para provocar un estado de terror, intimidar a una población u obligar a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Independientemente que el criterio pueda o no compartirse, lo cierto es que su señalamiento, ante la imposibilidad de definir el terrorismo, apunta a establecer exigencias que limiten el poder y neutralicen los intentos de formulaciones típicas vagas e imprecisas. Por ello, las exigencias comentadas deben presentarse de manera acumulativa.

De este modo, lo expuesto sirve para poner en evidencia que lejos de la declamada (en los fundamentos del proyecto) finalidad de participar activamente en el proceso de armonización normativa internacional que promueven los organismos internacionales, el proyecto ni siquiera considera los requisitos mínimos que, como umbral de seguridad, señala el derecho internacional.

Lejos de ello, la fórmula propuesta criminaliza al que *tomare parte* de una asociación ilícita que, mediante la comisión de delitos, tenga el propósito de aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que presente las siguientes características: (a) estar orientado su plan de acción a la propagación del odio étnico, religioso o político; (b) estar organizadas en redes operativas internacionales y (c) disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas.

Ni la ultrafinalidad de causar muertes, lesiones graves o tomar rehenes, ni la apelación a las convenciones internacionales para determinar qué actos deben ser prohibidos en la supuesta lucha contra el terrorismo, han sido relevados normativamente en la figura.

Por el contrario, la figura se estructura con elementos vagos, que carecen de referencias materiales precisas y que evidencian una laxitud o apertura incompatible con el principio de tipicidad (máxima taxatividad) como concreción técnica del principio de legalidad.

De un lado, la referencia a "... mediante la comisión de delitos...", supone que la asociación puede tener por objeto cualquier delito, de cualquier naturaleza, clase o gravedad. Esta vaga referencia representa una fuente de problemas interpretativos. Si se sostiene que para penalizar la asociación debe acreditarse la comisión de delitos, tal entendimiento resultará además objetable por la innecesariedad de una doble punición frente al hecho cometido y también por la contradicción que supone exigir la comisión de delitos para castigar la asociación y excluirla para castigar el financiamiento a los miembros de la asociación.

¹⁰ El concepto de "terrorismo" es esquivo. Brian Jenkins, uno de los expertos más respetados de Estados Unidos en el tema, expresó: "Terrorismo es lo que hacen los malos".

Si, en cambio, se sostiene que el tipo se satisface con la sola participación en la asociación (mediante una amplia referencia a la comisión de delitos en general sin ninguna limitación a los delitos comprendidos en el ámbito de las convenciones internacionales relativos al terrorismo y que afecten la vida —causar muertes—, la integridad física —graves lesiones corporales— o la libertad —tomar rehenes—), también podrá cuestionarse su validez constitucional e, incluso, el desconocimiento de los estándares internacionales que tanto parecen preocupar a los legisladores.

La lesión a la estricta legalidad no se neutraliza, como se ha dicho, con el recurso a ambiguas herramientas normativas [incisos a), b) y c)] que se procuran como instrumento de clausura de la interpretación pero que suman a la caracterización de la figura como un tipo abierto que se perfila como herramienta potencial para la criminalización indeterminada, en tanto las exigencias de los incisos a), b) y c), permiten incluir el comportamiento de personas que nada tienen que ver con actos terroristas aún cuando puedan estar vinculadas a otro tipo de ilicitudes penales.

Vale mencionar asimismo mencionar que la *conspiracy* aparece de algún modo receptada entre nosotros a partir de la ratificación de la Convención de Roma y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, resulta más que llamativo que mientras se reguló la posibilidad de su penalización vinculada a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra (es decir, que habilitan la jurisdicción de la CPI), en el tratamiento y discusión del estatuto expresamente se excluyó el delito de terrorismo, así como el de narcotráfico.

Una paradoja más, en tanto aquello que se rechazó a nivel internacional pretenden hacerlo nuestros legisladores en el Código Penal.

3. La anticipación punitiva y los actos preparatorios.

Lejos de admitir el consenso que sobre la constitucionalidad de la figura de la asociación ilícita se sostiene en los fundamentos, le caben al proyectado artículo 213 ter idénticas objeciones constitucionales y operativas que las descargadas históricamente por la doctrina penal a la figura asociativa básica por su incompatibilidad absoluta con el contenido del artículo 19 constitucional, al violentar el principio del acto y el de lesividad.

Pero no sólo por involucrar la afectación a casi todos los límites que condicionan la producción legislativa penal (reserva, lesividad, entre otros) sino por haberse convertido, por vía aplicativa, en instrumento preferido para abusar de una pena prohibida (encarcelamiento preventivo) sin delito.

Para peor, se hace difícil comprender este nuevo criterio de construcción de figuras asociativas básica y otras especiales y agravadas (asociación

ilícita terrorista, asociación ilícita tributaria, organización ilícita de la ley 23.592 y ya vendrán otras), en una suerte de configuración de un derecho penal especial (el de las asociaciones ilícitas).

Como si los problemas hermenéuticos fueran pocos, la propuesta sumaría su aporte a las múltiples formas que, inexplicablemente, la legislación vigente utiliza para penalizar o agravar la intervención de personas en el delito (concurso premeditado de dos o más personas, dos o más personas, tres o más personas, en banda, en despoblado y en banda, en lugar poblado y en banda y una amplia gama y variedad de figuras asociativas).

4. La tesis del tipo independiente de participación.

El artículo 213 quáter tipifica la recolección o provisión de bienes o dinero, por el medio que fuese, con el conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar una asociación ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter o a un miembro de éstas para la comisión de uno de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento.

El núcleo típico (recolectar o proveer) está tomado del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, fuente de inspiración de estas nuevas normas. Se trata de una figura que no reconoce antecedente alguno en la legislación argentina y que, a pesar del declamado objetivo de armonización normativa respetando la lógica jurídica de la misma, se convierte en un nuevo aporte a la destrucción, precisamente, de la lógica que se dice preservar.

Reiteradamente se ha recomendado identificar la conducta de financiación del terrorismo como una conducta ilícita libre y autónoma y no ya dependiente de las reglas de la participación criminal.

La exigencia olvida que, según los casos, quién así se comporta puede llegar a ser coautor de graves delitos o, eventualmente, instigador o cómplice primario o secundario. Sin embargo, parece que ello no alcanza.

Tal vez éste haya sido el objeto central de la reforma que, para encontrar alguna referencia, ha obligado a regular la asociación ilícita terrorista.

La pretensión no deja margen de dudas y por vía de una u otra figura, o de ambas relacionadas, se sorteas la exigencia de penalizar a quién participe en un hecho punible para pasar a castigar la sola participación y, además, como delito autónomo, un eventual acto de instigación o cooperación.

La configuración de un delito autónomo de participación criminal, a pesar de las recomendaciones por diferenciar el financiamiento como tal, supone la violación del derecho positivo, el desconocimiento del principio de la accesoriidad real y limitada, así como la apelación a criterios que históricamente han caracterizado los derechos penales totalitarios y autoritarios.

De este modo, se abre el camino a la pretensión de admitir la tentativa de participación criminal y con ello la posibilidad de una apertura ilimitada de la intervención penal estatal.

Esta prohibida extensión de la habilitación de la intervención penal es visible cuando se advierte que en el texto del artículo se prescribe una pena gravísima (cinco a quince años de prisión o reclusión), salvo que correspondiere una pena mayor por aplicación de la regla de los artículos 45 y 48 C.P.

De este modo, de un lado se admite el comportamiento de financiación de una asociación (participación en un acto preparatorio) como delito autónomo pero, al mismo tiempo, ese carácter de delito autónomo queda desplazado si por aplicación de las reglas de la coautoría, la instigación o la complicidad primaria, es posible aplicar una pena mayor a la conminada. No caben dudas que la naturaleza autónoma o accesoria de un comportamiento queda ahora determinada por la mera necesidad de pena grave y no del criterio seguido desde el inicio por nuestro código penal de la diferenciación real y la accesoriidad, ni mucho menos por la regla del artículo 48.

Es realmente un contrasentido, que el propio artículo proyectada refiera expresamente al dispositivo general que termina desconociendo, el artículo 48 C.P. Luego, es absurdo pretender que el proyecto procura respetar la lógica estructural de organización de la legislación argentina.

Que el Código Penal contenga algunos excepcionales supuestos de penalización como delito autónomo de verdaderos actos de participación criminal (tal el caso, incorporado por la ley 24.410, previsto en el artículo 139 bis) no significa que esa sea la lógica estructural que los haya inspirado. Por el contrario, significa que ese es el camino que ha profundizado la ruptura de esa lógica y que, por tanto, no debemos seguir. La única lógica de organización de la legislación penal argentina debe buscarse en las normas y principios constitucionales, sobre cuyo alcance hay abundante doctrina y jurisprudencia.

Para colmo, en el fundamento del proyecto se sostiene que el artículo 213 quáter proyectado abarcaría dos supuestos diversos. Uno tipificando la conducta de financiación con independencia del acaecimiento de alguno de los delitos que son objeto de la asociación (pura actividad); el otro, tipificando el caso en que se hubiera tentado o consumado algún delito, supuesto en que se aplicaría la escala penal derivada de los artículos 45 y 48 C.P., siempre que ella resulte más grave que la conminada (5 a 15 años de prisión o reclusión). Sin embargo, del texto del artículo no resulta sencillo derivar tamaña conclusión y ello no es más que el resultado de la pretensión de construir una figura que se aleja de las reglas que la legalidad, la reserva y la lesividad, imponen para la configuración normativa de un comportamiento.

En cualquier caso, algo llamativo el de un tipo penal ajustable, que de figura autónoma se transforma en guía para la aplicación de las reglas de la coautoría y participación criminal, ya ni siquiera en función de la ocurrencia de un delito sino de la pena prevista para el mismo. A esta altura no cabe duda alguna que se pretende tipificar incluso un supuesto de tentativa de participación criminal.

Asimismo, en consonancia con esa apertura ilimitada, se estructura la figura como delito de pura actividad, sin que resulte necesario un resultado típico. Basta el comportamiento de recolectar o proveer fondos o bienes.

Del mismo modo, se reduce el dolo típico al mero conocimiento, abriendo la posibilidad de incluir comportamientos con dolo eventual y, por vía de alguna descabellada interpretación, hasta supuestos de culpa con representación. Es que según la formulación, alcanzaría con que el sujeto activo se haya sólo representado la posibilidad de que los bienes, o dineros provistos serán utilizados para financiar una asociación ilícita terrorista o a un miembro de ella, independientemente de su voluntad efectiva de apoyar o colaborar con esa asociación o miembro de la misma.

Respecto a los elementos típicos, dada la confusa redacción, la norma proyectada parece distinguir dos supuestos, en tanto refiere al que recolecte o provea fondos con conocimiento de que serán utilizados por una asociación ilícita terrorista (en cuyo caso basta con el conocimiento del destino de los fondos) y también cuando tenga conocimiento de que serán utilizados por un miembro de estas para la comisión de uno de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento (en cuyo caso corresponderá que se demuestre el propósito del miembro de la asociación de utilizarlos para la comisión de uno de los delitos que constituye el objeto de la asociación y que, hemos visto, puede ser cualquier delito). Si ello fuera así, en el caso que los fondos estuvieran destinados a ser utilizados por el miembro de una asociación terrorista, el conocimiento del autor debería abarcar también el conocimiento de la condición de miembro y del propósito del beneficiario. Como puede verse, la técnica de configuración empleada además de inadecuada, es de difícil y sistemática objetación, que son consecuencia del poco apego a los principios constitucionales que debería respetar el diseño de los tipos penales.

5. *El peligro abstracto.*

También en la configuración normativa se apela a figuras de peligro abstracto, es decir, a una técnica de tipificación que constituye, por excelencia, el modo de criminalizar comportamientos lejanos a la afectación concreta de un bien jurídico.

Toda conflictividad típica que no requiera directamente la lesión de un bien jurídico básico repre-

senta una anticipación punitiva que obliga a precisar la proximidad del peligro, con atención tanto a la circunstancia concreta de la acción como de la finalidad del agente.

El derecho penal debe desentenderse de los cursos de acción que sólo revelan una posibilidad de afectación abstracta y admitir que la lesión o peligro real de un bien jurídico son exigencia y fundamento de la ilicitud y el castigo y deben demostrarse en cada caso.

De esta forma, el diseño de los artículos 213 ter y 213 quáter, comprometen el principio constitucional de lesividad y habilitan la intervención penal sin lesión o peligro concreto.

6. *La superposición normativa y los eventuales problemas hermenéuticos.*

Antes que someterse a indicaciones de convenios internacionales simples (es decir, que están por debajo de las normas constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos con igual jerarquía), debemos reparar si tenemos y, en su caso cuáles son vacíos normativos.

No se trata de aceptar linealmente una recomendación al margen de nuestra propia cultura jurídica y de nuestra realidad, a no ser que se decida resignar un margen mínimo de intervención autónoma. En suma, analizar los caracteres del fenómeno en nuestro país y el orden de demanda de nuevas normas.

En ese marco, cabe preguntarse si existen algunas conductas que pretenden atraparse por las normas proyectadas que no estén contempladas en el actual Código Penal.

Lo cierto es que nuestra legislación vigente satisface suficientemente las convenciones sobre la materia, en tanto no hay acto posible del nebuloso y discutido concepto de terrorismo que no resulte alcanzado por alguna de las figuras penales vigentes.

De hecho, el financiamiento del terrorismo está penado por aplicación de las reglas de la coautoría y la participación criminal amplia y lo mismo ocurre con la asociación ilícita (más allá de que la tentativa de homicidio calificado tenga la misma pena que asociarse para cometer un homicidio calificado).

De otra parte, como señala el CELS, el inciso a) del artículo 213 ter proyectado apela a un elemento normativo consistente en orientar el plan de acción de la pretendida asociación a la propagación del odio étnico, religioso o político, con lo que su concurrencia con la previsión contenida en la ley 23.592 (habilita el aumento de la escala penal para todo delito que se cometa por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso) podría dar lugar a supuestos de doble punición.

Nuestro Código Penal tipifica los delitos contra el orden público y contra la seguridad pública de un modo muy detallado con penas exageradamente elevadas, resultando innecesario e inconveniente regular un tipo penal de terrorismo.

Innecesario porque no hay vacío normativo. Inconveniente porque puede debilitar todo el sistema de garantías y convertirse en instrumento de persecución de actividades que nada tienen que ver con el objeto invocado para la regulación, circunstancia que además se agrava por la imposibilidad de encontrar una definición de dicho fenómeno.

Se sabe, y caso contrario resulta fácilmente verificable en la actualidad, que cuando las garantías cedan no se perjudican los terroristas sino la ciudadanía.

7. *Las escalas penales.*

En línea con las últimas reformas penales y la apelación a escalas penales irracionales, se establece una pena de cinco a veinte años de prisión, reclusión para la asociación ilícita terrorista, previéndose que el mínimo se eleva a diez años para los fundadores o jefes de la asociación.

Por su parte, se conmina con reclusión o prisión de cinco a quince años para el delito de financiación del terrorismo.

También en este punto, el proyecto resulta lesivo a principios constitucionales que han a la legalidad de las penas y a su proporcionalidad.

Llama la atención que ni siquiera se haya reparado en la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso "Nancy Méndez") y se apele a una escala alternativa entre reclusión y prisión, a pesar de que la primera ha sido derogada y, eventualmente, resulta inconstitucional.

Nuevamente, la escala posibilitará la paradoja de que el peligro de peligro se encuentre más severamente penado que, por ejemplo, la tentativa de homicidio e incluso que muchos delitos de lesión.

Del mismo modo, es también objetable la confusa redacción del artículo 213 quater al establecer pena de 5 a 15 años de prisión o reclusión, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48 C.P.

En el fundamento del proyecto se pretende sostener, en base a esta referencia, que la norma contempla dos supuestos: a) pena de 5 a 15 años para la conducta de financiación con independencia del acaecimiento de alguno de los delitos que son objeto de la asociación; b) pena mayor para el caso en que se hubiera tentado o consumado algún delito, supuesto en que se aplicaría la escala penal derivada de los artículos 45 y 48 C.P., aclarándose que su aplicación está condicionada por su mayor gravedad. De este modo, la escala consignada (5 a 15 años) jugaría como un piso obligatorio y resultaría aplicable aún al segundo supuesto cuando del juego de los artículos 45 y 48 C.P. no resulte una pena mayor.

La gravedad de la escala y la cláusula de reenvío en función de un delito acaecido (cometido), llevará a otro de los tantos absurdos que muestra en la actualidad la legislación argentina y que ha permitido institucionalizar, entre nosotros, la regla de la desproporcionalidad e irracionalidad de las penas. De hecho muchos delitos graves de lesión quedarán con una escala penal inferior a la prevista para esta modalidad participativa autónoma, salvo que el delito acaecido tenga pena más grave en cuyo caso surgirá la discusión respecto a la fórmula imputativa (¿simple o plural?)

III. Consideraciones de orden procedimental

1. De un lado, nada puede impedir que el poder político decida, desde el punto de vista de la oportunidad o la conveniencia, llevar adelante en la agenda política criminal el debate sobre una problema grave como el terrorismo.

Tal vez pueda señalarse que el tema tiene una gran complejidad, especialmente en función de lo ocurrido en el último cuarto del siglo pasado entre nosotros y la ausencia de una tipificación del terrorismo de estado. Es llamativo que históricamente los representantes de algunas potencias hegemónicas ante las Naciones Unidas hayan rechazado de forma inexorable la mera posibilidad de que exista el “terrorismo de Estado”.

2. De otra parte, la mecánica de consulta y tratamiento de una norma penal, en especial de una vinculada a la temática en análisis, merece una profunda consideración que no se compadece con la urgencia que se ha evidenciado para su rápido tratamiento.

Probablemente, pensando en lo importante, en algún momento habrá que discutir seriamente sobre la elefantiasis normativa penal, sobre los factores y procesos que hacen a la toma de decisiones en materia de intervención penal y sobre los verdaderos alcances del principio de legalidad que, sin duda, impone como exigencia de validez de un sistema de legislación penal la necesidad de poner fin al fuerte proceso de descodificación que sólo ha contribuido a generar dispersión normativa, niveles alarmantes de contradicción e incoherencia, ruptura de toda regla de proporcionalidad de las penas y grave afectación al principio de culpabilidad.

Estimo respetuosamente que la agenda política criminal de la Argentina tiene otras urgencias y problemas importantes que lejos están de las exigencias externas para inflacionar aún más un sistema legal –deformado– con normas como las aquí comentadas.

DANIEL ERBETTA

Director del Departamento Derecho Penal y Criminología U.N.R.
Presidente Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.

2

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI

**Tema: Penalización de asociaciones ilícitas
terroristas y su financiamiento**

(Orden del Día N° 306)

Señor presidente: he firmado en disidencia total el dictamen de las comisiones, razón por la cual voy a realizar la fundamentación de mi voto negativo al proyecto de ley en tratamiento que tiende a incorporar los artículos 213 ter y quáter en el Código Penal de la Nación.

Creo que este debate es muy importante. La primera pregunta que surge con relación al tratamiento de este proyecto es si resulta necesaria la incorporación de un tipo penal, o sea, si es necesaria la respuesta a un vacío existente en nuestra legislación.

Si consultamos con la mayoría de los especialistas en derecho penal que plantea un concepto filosófico y práctico que ha generado un debate permanente en nuestro país y en los distintos países del mundo en lo que concierne al combate del delito en general y al terrorismo en particular, comprobaremos que, bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha contra la delincuencia, muchas veces se sacrifican principios y disposiciones de orden constitucional.

Por eso, me parece fundamental incorporar en este debate dos trabajos muy importantes que hacen referencia al proyecto que estamos tratando, cuya inserción en el Diario de Sesiones pido se apruebe oportunamente.

El primer trabajo pertenece al Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS– y formula importantes observaciones. Básicamente, plantea la incompatibilidad de los tipos propuestos como el artículo 213 ter y quáter en el Código Penal con los desarrollos del derecho internacional, sosteniendo además que los tipos penales del proyecto violan principios constitucionales como el de legalidad.

El otro trabajo que pido se incorpore pertenece a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, que también manifiesta una disidencia total con el proyecto en tratamiento. En una de las consideraciones que efectúa el presidente de esa asociación, se plantea cómo se ha dado el desarrollo internacional en el combate contra este tipo de delitos. Creo que aquí reside el tema central que se ha planteado: es decir, por qué incorporamos hoy un tipo penal de estas características, a pesar de que este es un debate que tiene años en el Parlamento argentino.

Un argumento fuerte es el pedido del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Se

trata de un grupo intergubernamental del cual forma parte la República Argentina junto a veintiocho países más y a organizaciones internacionales como la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Si bien el GAFI nació en 1989 dedicado a cuestiones vinculadas con el blanqueo de capitales de origen ilícito, a comienzos de 2001 y a instancias del Fondo Monetario Internacional, empezó a elaborar lo que se convertiría en la metodología de evaluación del cumplimiento de normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este instrumento tiene cuarenta recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y ocho recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo emitida por el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales.

Por ello, esto debería enmarcarse en un debate acerca del contexto internacional. Todos quienes estamos aquí sentados rechazamos en términos absolutos el terrorismo. Creemos en la paz es decir, rechazamos la guerra y rechazamos el terrorismo y a los terroristas. Pero evidentemente, hay un debate acerca de cuál es la metodología que se debe desarrollar a través de las organizaciones internacionales y de los países en el combate de los delitos terroristas.

Vemos que a partir del 11 de septiembre y del terrible atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York, se originó un proceso de armonización normativa internacional en materia de financiación del terrorismo, que es objeto de serios cuestionamientos. Y este proceso no es más que la pretensión de estandarizar en el plano internacional los conceptos del Acta Patriótica que rige en los Estados Unidos.

Es decir, que el debate respecto del terrorismo y las formas de combatirlo en los distintos lugares del mundo se está dando todavía hoy, creo que a des-tiempo y mal. Por eso, hoy es inconveniente la incorporación de este tipo penal en el Código Penal.

Tenemos dos cuestiones que hoy nos permiten realizar un balance en el mundo. Primero, el descrédito de las organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que ha impulsado como recién decíamos este tipo de incorporaciones al plexo normativo de los distintos países del mundo. En segundo lugar un concepto de combate contra el terrorismo desarrollado desde la administración republicana que es hoy cuestionado en el seno mismo de los Estados Unidos, como el de la guerra preventiva contra Irak.

Por eso, específicamente respecto del desarrollo concreto de este, proyecto de ley, es decir, de la incorporación del tipo penal y las consideraciones de orden técnico dogmático, considero que la incorporación de este tipo penal es absolutamente cuestionable, desde el punto de vista de cuál es el bien jurídico a lesionar o el bien jurídico cuya tutela se procura con esta incorporación.

En este sentido, a través de sus conceptos y desarrollos, Raúl Zaffaroni es absolutamente contrario a la incorporación de este tipo penal. Enseña que la creación artificiosa de bienes jurídicos públicos que no simbolizan más que desobediencia a la autoridad, permitió la legitimación de tentativas de delitos de peligro que no importaban peligros reales para el núcleo central de bienes jurídicos, lo que constituye una imputación en violación al presupuesto de "lesividad". Se trata de la cuestión abstracta que planteaba un senador preopinante cuando abordaba este tipo penal. Zaffaroni, plantea que el riesgo real es que tales tipos, lejos de producir una sensación de seguridad respecto del valor del derecho, terminen amenazando los espacios de libertad social indispensables para la convivencia democrática. En esto reside nuestro cuestionamiento al artículo 213 cuya incorporación se propone hoy.

Por otra parte, si bien los argentinos nos caracterizamos por la originalidad, es llamativo que lo que todavía no se ha hecho en el ámbito internacional pretendamos hacerlo ahora en el Código Penal. Me refiero a la definición de "terrorismo". Es más, se trata de un concepto tan esquivo y ambiguo, que se ha discutido tanto en el plano internacional, que hasta Brian Jenkins, uno de los expertos más respetados de Estados Unidos en el tema, expresó que terrorismo es "lo que hacen los malos".

En consecuencia, creo que debemos tener prudencia acerca de la incorporación de estos tipos penales en el Código. Al respecto, considero que es un paso equivocado el que se está dando, que contraría en muchos aspectos a la política llevada adelante desde el gobierno nacional, que no es suficiente como fundamentación el pedido de un organismo financiero internacional como el GAFI para que se incorpore este tipo penal al Código Penal y que deberíamos haber desarrollado un debate mucho más extenso y profundo.

Reconozco que este debate no es nuevo, sino que desde hace tiempo que se viene dando, fundamentalmente, en el Senado. Pero existen grandes interrogantes gigantes acerca de lo que hoy votaremos en esta Cámara.

Terminaré mi exposición leyendo lo que la Convención Interamericana contra el Terrorismo que rige desde noviembre de 2003 establece en su artículo 15. Primero: las medidas adoptadas por los Estados parte, de conformidad con esta Convención, se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Segundo: nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al Derecho Internacional, en particular, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados. Tercero: a toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente Convención, se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías, de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional.

Por supuesto la historia reciente nos los demuestra-, debemos creer muchísimo más en las Naciones Unidas, en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en los organismos financieros internacionales, que nos piden que incorporemos figuras penales tan ambiguas como la que se pretende incluir en nuestro plexo normativo jurídico en este momento.

Por estas razones, y con el pedido de inserción de los dos opúsculos -el del Centro de Estudios Legales y Sociales y el de la Asociación de Profesores de Derecho Penal-, reitero mi voto negativo al proyecto en tratamiento.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FERNANDEZ

**Tema: Declaración de utilidad pública y
expropiación de diversos inmuebles**

(Orden del Día N° 305)

Señor presidente:

Las primeras reflexiones que me produce este proyecto de ley son de alabanza y reconocimiento a una iniciativa necesaria e imprescindible. Se buscó y logró una alternativa que permitiera al Hospital Francés continuar prestando servicios de salud, uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la vez, una obligación ineludible del Estado.

Esto es lo que procura y logra este proyecto al permitir la continuación en funcionamiento del citado nosocomio en órbita del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, comúnmente conocido como PAMI.

Hasta los miembros de la oposición, como el senador Morales, han opinado positivamente sobre este proyecto.

No es menos cierto, que el mencionado legislador propuso incorporar un artículo que decía "Establécese que la totalidad del personal afectado a la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia continuará prestando sus servicios al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, reconociéndoseles su antigüedad, categoría y demás derechos laborales adquiridos. Asimismo, el Estado nacional procederá a abonar la deuda salarial existente a partir del 29 de marzo

de 2006 y a regularizar los aportes jubilatorios no depositados de los trabajadores."

La redacción de esta cláusula estuvo inspirada conforme reconocen los autores en el decreto 721 por el cual se rescinde el contrato de concesión del Correo Argentino, en especial por lo dispuesto en su artículo 91: "Establécese que la totalidad del personal afectado a la ex concesionaria Correo Argentino S.A. de conformidad con el numeral 26.3 del contrato de concesión oportunamente suscrito entre el Estado Nacional y dicha empresa, continuará prestando sus servicios en el Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima".

Estimamos que dicha asimilación no resulta precedente, porque mientras que en el caso del Correo Argentino, se trataba de la rescisión de un contrato de concesión celebrada con una empresa privada, cuyas actividades, en lo sucesivo, iban a ser prestadas por el Estado nacional a través de una empresa cuyo capital era 100 % del mismo Estado nacional (Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima).

En el presente caso, se expropia un inmueble que pertenece a un ente privado para otorgárselo a un ente no estatal como el PAMI.

En el caso del Correo Argentino, es claro que si el Estado es el destinatario de los bienes y va a ser quien en lo sucesivo va a prestar los servicios, puede y debe prever lo conducente a la relación laboral que en el futuro va a vincular a los empleados de la empresa privada cuyo contrato de concesión le fue rescindido.

En este caso, si el Estado nacional no va a ser quien se queda con los bienes y tampoco quien presta el servicio de salud en el futuro, no corresponde se inmiscuya en las relaciones entre particulares.

Debemos destacar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Fuero Contencioso Administrativo reiteradamente se han pronunciado reconociendo que el PAMI es un ente público no estatal, de lo que se deriva que no es un ente o persona jurídica que pertenezca a la Administración Pública.

En efecto, y a manera de ejemplo, podemos citar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Instituto Nacional de Servicios Sociales para Pensionados y Jub. c/Dintel S.A. 0148 del 11/12/01", donde se sostuvo que el Pami tiene la naturaleza jurídica de un ente público no estatal.

La Cámara Nacional Contencioso Administrativo se ha expedido en sentido concordante, entre otros en la sentencia de fecha 24 de junio de 2003, recaída en la causa "Instituto Nacional de Servicios Sociales para J.P. (PAMI) c/ E.N. (M° de Salud y Acción Social) s/ proceso de conocimiento", en la que se sostuvo "La ley 25.615 al dar un nuevo texto al artículo 19, de la ley de creación del INSSPJ 19.032,